



Boletín del WRM

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Nro. 229 – Febrero / Marzo 2017

El Sudeste Asiático: conectando pueblos que resisten las inversiones a gran escala y las iniciativas de conservación



NUESTRA OPINIÓN

- **Sudeste asiático: fortaleciendo la resistencia más allá de las fronteras** p. 3

EL SUDESTE ASIÁTICO: CONECTANDO PUEBLOS QUE RESISTEN LAS INVERSIONES A GRAN ESCALA Y LAS INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN

- **Inversiones a gran escala e iniciativas de conservación del clima destruyen los bosques y los territorios de las comunidades** p. 6
- **Conflictos forestales en Tailandia: el Estado contra el pueblo** p. 10
- **Myanmar: nueva política que defiende los derechos indígenas ya corre peligro** p. 14
- **El bosque en el noreste de la India** p. 20
- **Indonesia: leyes propuestas amenazan restablecer el control de las empresas sobre la agrobiodiversidad** p. 25
- **Camboya: luchando contra la maldición de las concesiones** p. 28
- **Malasia: grupos indígenas de todo el mundo adoptan declaración contra represas** p. 33



ALERTAS DE ACCIÓN

- **Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta** p. 37
- **Guyana Francesa: El gobierno francés promueve calladamente la industrialización de la minería de oro en Guyana Francesa** p. 37
- **Investigación de la BBC revela saldo mortal de la política de tirar a matar en las reservas de tigres en la India** p. 37
- **Malasia: Dejemos de reconocer las plantaciones como bosques, expresó carta a la FAO** p. 38
- **Indonesia – Protestas en Java contra la destrucción de los bosques por la expansiva industria cementera** p. 39

RECOMENDADOS

- **Informe: ¿Qué pasa con nuestros bosques?** p. 39
- **Video: Las amenazas de la minería de oro en el río Tanintharyi, en Myanmar** p. 40
- **Informe: Cultivando desastres: las principales compañías del mundo van por la cosecha** p. 40
- **Entrevista: “El aceite de palma sostenible obtenido de la producción industrial de palma aceitera no existe”.** p. 41
- **Informe Vietnam: ¿Por qué y cómo hacer una agricultura ecológica?** p. 41
- **Informe: Cediendo soberanía: Cómo los acuerdos de inversión amenazan la regulación de la minería en Filipinas** p. 41



NUESTRA OPINIÓN



Sudeste asiático: fortaleciendo la resistencia más allá de las fronteras

Éste es el tercer boletín regional del WRM en los últimos 10 meses. El primer número regional ([Boletín 224 del WRM](#)) examina lo que impulsa el acaparamiento de tierras en la región de la Cuenca del Congo en África. El segundo boletín regional, [número 226](#), está dedicado a la resistencia de los pueblos a un pasado colonial que persiste con imposición y violencia a lo largo de América Central. En este número, el foco está puesto en la región comúnmente referida como sudeste asiático.

Con estos boletines regionales, el WRM quiere llamar la atención sobre las luchas de resistencia en regiones particularmente afectadas por la destrucción de los bosques. El objetivo no sólo es dar visibilidad a la situación y las luchas comunitarias, sino también apoyar los procesos a menudo desafiantes de trabajo en redes y creación de movimientos entre organizaciones comunitarias, grupos activistas y movimientos sociales en los países particulares de cada región y entre las diferentes regiones.

La elaboración de boletines regionales ha sido un buen ejercicio de aprendizaje. Hemos observado, por ejemplo, que las fronteras geográficas existentes que delimitan los estados nacionales y conforman las regiones destacadas suelen separar y aislar a las comunidades que luchan por defender sus medios de subsistencia y sus bosques. El sudeste asiático no es una excepción. Los territorios de Camboya, Indonesia, Timor Oriental, Laos, Malasia, Brunei, Birmania, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam figuran generalmente bajo el término de sudeste asiático, pero Papua Nueva Guinea, los provincia china de Yunnan, o el estado indio de Manipur, no son vistos como parte de esta región. Esta exclusión revela que el término sudeste asiático es más una referencia política que una referencia puramente geográfica. La comprensión actual del término se remonta al proceso relativamente reciente de cuando los estados coloniales europeos empezaron a repartirse la vasta región entre ellos. Esta conquista, aunque está envuelta en agendas de diferentes nombres e involucra a un gran conjunto de actores institucionales, continúa hasta el día de hoy.



En noviembre de 2016, colegas y amigos de la mayoría de los países de la región se reunieron en Bangkok, Tailandia/Siam, para compartir historias y sentimientos de los diversos contextos locales de crisis. La reunión se centró en torno a una preocupación común: “¿qué está pasando con nuestros bosques?” Comparando, discutiendo y entrelazando entre todos las similitudes de las remembranzas que cada participante trajo a la reunión, esta pregunta reveló inmediatamente que el sudeste asiático tiene, como región, una historia de “pérdida de bosques”. Esta percepción contrasta fuertemente con la falsa imagen de “crecimiento y desarrollo” de la región presentada por las élites políticas y los responsables políticos de las instituciones internacionales.

De la síntesis de las situaciones de crisis relatadas por los participantes surge una serie de puntos en común y también la singularidad de cada situación de las comunidades en los diferentes países. Uno de los puntos en común es la experiencia de que el llamado marco de “crecimiento verde” es el mismo en cada país. Se trata de la vieja doctrina del crecimiento económico extractivo, ahora con una etiqueta “verde”. Estos procesos destructivos con su nueva cortina de humo verde abarcan a muchos actores, viejos y nuevos - y generalmente no locales. Al mismo tiempo que se impone el discurso del “crecimiento verde”, los gobiernos de la región se vuelven cada vez más dependientes del extractivismo para su supervivencia política. Por otra parte, se sigue culpando falsamente a la población local de la destrucción del medio ambiente, y la dependencia intergeneracional que mantienen con los bosques para satisfacer sus necesidades básicas es presentada como causa de pobreza. El uso de la violencia y la represión contra las comunidades va en aumento, pero, al mismo tiempo, cada vez más las comunidades se hacen cargo de sus resistencias y su defensa, avanzando con denunciar y voltear la estrategia de culpa.

Una de las impresiones más fuertes de la reunión de Bangkok fue que el destino de los bosques a través del carácter destructivo del “progreso” y la alteración que provoca, ofrece los lazos invisibles que reconectan las historias de la subregión continental - incluido el Noreste de la India y el Mekong - y la subregión de las islas de Malasia, Indonesia y Filipinas. Los actores estatales y privados responsables de la destrucción que caracteriza al “desarrollo” en toda la región han tenido que inventar constantemente nuevas historias para encubrirlo y presentar esta destrucción como “progreso”. Suelen pintar las prácticas agroecológicas y su tejido social dentro de las comunidades forestales como atrasadas, anticuadas e improductivas. La realidad no podría estar más lejos de esta falsa representación.

Como resultado de esta constante presión, en algunos lugares la unidad social y ecológica a la interna de las comunidades así como entre ellas, ha comenzado a desmoronarse, mientras que la diversidad de formas, instituciones y mecanismos de solidaridad humana se convirtieron en arsenales para la estrategia divide y reinarás. Por último, pero no menos importante, el asesinato y el saqueo fueron escondidos detrás de apariencias y nombres nuevos. Para nombrar sólo algunos de ellos, en Filipinas, los asesinatos extrajudiciales son “medidas enérgicas de la ley y el orden” (1); en Camboya, la demorada investigación oficial de un tiroteo brutal se atribuyó a la forma en que las familias de las víctimas lo informaron a la policía (2); en Indonesia, el apoyo financiero para suavizar la expansión de las plantaciones de palma aceitera utiliza palabras clave como “asegurar los derechos territoriales de las comunidades locales comprometiéndose con el sector de las plantaciones” o “apoyar los esfuerzos para proteger bosques con alto valor de conservación/alto contenido de carbono en concesiones de palma aceitera”. (3).



Una manera de mantener en silencio e invisibilizar la destrucción de los bosques así como el sufrimiento resultante y la resistencia de las comunidades en todo el sudeste asiático, ha sido que los responsables de la destrucción han contrastado los daños con los llamados planes de “desarrollo”. Por ejemplo, el Plan de Acción Forestal Tropical (TFAP) de 1986 del Banco Mundial renombró la destrucción como “desarrollo industrial con base en el bosque”, agregando la expansión de las áreas de conservación como forma de mantener la destrucción bajo control. Exactamente tres décadas más tarde, la reunión de Bangkok observó que, aunque el TFAP fue archivado hace largo tiempo, la protección forestal y la destrucción de los bosques que introdujeron existen hoy bajo nuevos nombres: como políticas, programas o marcos para el “crecimiento verde”; como “escenarios en el que todos ganan” para la protección del “medio ambiente y desarrollo”, o para la “conservación y mitigación de la pobreza”; como créditos de carbono o de “compensación” con reconocimiento de derechos; como “corredores de biodiversidad” o “compensación de biodiversidad” para “minería con impactos positivos en la biodiversidad”. Independientemente de los nuevos nombres, las consecuencias para las comunidades que dependen de los bosques siguen siendo las mismas que en los programas como el TFAP: restricciones a las prácticas tradicionales de uso de la tierra o incluso la pérdida de tierras para dar paso a nuevos acaparamientos “verdes” de tierras.

Aunque los avances de la destrucción de los bosques nunca conoció fronteras, la reunión de corazones en Bangkok demostró que la resistencia y la sanación tienen el poder de unir a las comunidades y los pueblos más allá de las fronteras, en el sudeste asiático y en todo el mundo. Este boletín es otra manera de apoyar y difundir este mensaje. Para apoyar este proceso, el boletín - que contiene artículos sobre el Noreste de la India, Tailandia, Myanmar, Indonesia y Camboya, así como un artículo general sobre la región - se traducirá a algunos de los principales idiomas de la región.

¡Disfruten de la lectura!

- (1) *Philippines' Duterte draws Hitler parallels in war on drugs.* AFP, 30 de septiembre, 2016 y <https://www.youtube.com/watch?v=MU5W5CJAPH4>
- (2) *Police Blame Family for Stalled Probe Into Lost Boy.* *The Cambodia Daily*, 2 de septiembre de 2015. <https://www.cambodiadaily.com/news/police-blame-family-for-stalled-probe-into-lost-boy-93151/>
- (3) *Climate and Land Use Alliance Indonesia Initiative. Grants and Contracts List.* http://www.climateandlandusealliance.org/wp-content/uploads/2017/01/Indonesia-Grants-List_2017-Q1.pdf



EL SUDESTE ASIÁTICO: CONECTANDO PUEBLOS QUE RESISTEN LAS INVERSIONES A GRAN ESCALA Y LAS INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN



Inversiones a gran escala e iniciativas de conservación del clima destruyen los bosques y los territorios de las comunidades

El rápido crecimiento económico y la industrialización de Asia tienen un precio excesivamente alto para las comunidades locales, su entorno y sus economías. En toda la región, el “desarrollo” se caracteriza por una inversión a gran escala, en cuyo centro se encuentran el control y la explotación de la tierra, los bosques, el agua, la naturaleza, los minerales y la mano de obra. Los gobiernos asiáticos están a la búsqueda de inversiones privadas para casi todos los sectores de la economía, desde energía, petróleo, minerales, agricultura y procesamiento de alimentos hasta educación, salud, turismo, manufactura, farmacéutica, transporte e infraestructura urbana. Las fuentes de inversión varían y generalmente se habilitan a través de acuerdos económicos y de ayuda bilaterales, multilaterales y regionales, a menudo respaldadas por un capital de naturaleza internacional y difícil de rastrear. (1)

La captura de tierras, bosques y agua tiene diversos fines: agricultura industrial, plantaciones de árboles, energía hidroeléctrica, industria extractiva, turismo, infraestructura de obras, negocios inmobiliarios, zonas económicas especiales (ZEE), corredores económicos y, sencillamente, para obtener lucro a través de la construcción de nuevos mercados. En cuestión de meses, paisajes y ecosistemas biodiversos se transforman en plantaciones de caucho, palma aceitera o mandioca, en pueblos cercados o represas, entre los cuales es posible que se asignen bosques o humedales como áreas protegidas y que se utilicen para generar una vía de ingresos “verdes”. Las poblaciones locales rara vez se benefician de estos cambios de paisaje y de los nuevos mercados. En su mayor parte pierden sus medios de vida, hogares, culturas, identidades así como el acceso a fuentes naturales de alimento; son desalojadas a la fuerza, reubicadas y expulsadas a trabajos precarios y mal remunerados. (1)

La concentración de la tierra es mayor ahora que nunca y muchos de los terratenientes pertenecen a elites políticamente conectadas, como en Filipinas, Camboya, República Democrática Popular Lao, Malasia, Pakistán, India e Indonesia. En los últimos 10 a 15



años, los gobiernos de toda Asia han iniciado una serie de cambios legislativos para eliminar las pocas protecciones que tradicionalmente han amparado a los pequeños agricultores y pescadores, los pueblos indígenas y los habitantes de los bosques, quienes ahora han quedado totalmente vulnerables frente a la pérdida de sus tierras a manos de empresas estatales y privadas para el desarrollo de agricultura industrial a gran escala, industrias extractivas, obras de infraestructura y “corredores económicos”. (2) Los cambios varían de un país a otro, pero todos están diseñados para facilitar a las empresas la adquisición de grandes áreas de tierra utilizadas hasta entonces por las comunidades locales, y que ahora destinan a la extracción de madera, minerales, agua y otras riquezas naturales, y todo con escasos controles reglamentarios.

Muchos de quienes formulan las políticas sostienen que la adquisición de tierras por parte del Estado es necesaria para asegurar el desarrollo y el crecimiento económico. Indonesia e India promulgan leyes que permiten la adquisición de tierras para grandes megaproyectos con la justificación del desarrollo nacional y el interés público. En Tailandia, el Plan Maestro Forestal (FMP) es el último de una larga serie de intentos por expandir las plantaciones de monocultivos de árboles en el país. Lanzado en junio de 2014 por el Comando de Operaciones de Seguridad Interna de Tailandia y el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el FMP otorga concesiones a empresas privadas para establecer plantaciones de árboles en zonas de bosque, lo cual coloca a las comunidades que viven en esos bosques y los cultivan frente al riesgo de que sean reubicadas de manera forzosa. (3) El gobierno camboyano convierte las tierras públicas en tierras estatales privadas y considera a los bosques comunitarios como “bosques degradados”, pasibles de ser otorgados a las empresas en concesiones económicas a largo plazo.

La expansión de los monocultivos de árboles se verá exacerbada por los nuevos fondos destinados a incentivar inversiones privadas en la denominada agricultura de “deforestación cero”. El último anuncio en ese sentido se hizo en el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), celebrado en enero de 2017. El gobierno noruego y transnacionales como Carrefour, Marks & Spencer, Mars, Metro, Nestlé, Tesco y Unilever prometieron hasta 400 millones de dólares. Se argumenta que dichos fondos incentivarán inversiones a gran escala del sector privado en el uso comercial de la tierra que también protegerán y restaurarán bosques y turberas. (4)

Sin embargo, a partir de la experiencia de programas similares que se han implementado en países como Vietnam, Indonesia, Filipinas, Myanmar y Camboya, es probable que estos fondos promuevan sistemas de subcontratación en los que los pequeños agricultores quedan atrapados al poner sus propias tierras al servicio de la expansión de plantaciones de cultivos comerciales. En esos sistemas de subcontratación todo el riesgo recae en los pequeños agricultores, mientras que las empresas tienen el control de facto de las tierras campesinas. También permiten a la industria alimentaria mundial ocultar la expansión del control empresarial sobre las tierras de cultivo bajo el disfraz de la “responsabilidad social”. A menudo, los gobiernos crean líneas de crédito bancarias especiales para los agricultores que participan en estos sistemas de subcontratación, las cuales facilitan su endeudamiento para la compra de semillas, fertilizantes, etc. De esta manera están subsidiando esas iniciativas empresariales, en respuesta a las críticas por su falta de acción para reducir los impactos de la agricultura industrial sobre el cambio climático. Las pruebas empíricas recogidas hasta ahora muestran que estos planes de inversión privados han hecho poco por detener la deforestación o reducir el uso de la



mayor fuente mundial de emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la producción de cultivos, es decir, el uso de fertilizantes nitrogenados. Por ejemplo, en varios proyectos que se encuentran en el centro de Vietnam, a los agricultores se les indica aplicar fertilizantes nitrogenados, los cuales les son suministrados por la empresa noruega Yara, una de las empresas clave detrás de la Nueva Visión para la Agricultura del Foro Económico Mundial y empresa líder de la Alianza para la Agricultura Climática Inteligente. (5)

Mientras tanto, la agricultura tradicional practicada por los campesinos y los pequeños agricultores sigue sufriendo numerosos retos. Por ejemplo, en la República Democrática Popular Lao, los responsables políticos consideran que la agricultura migratoria es una de las principales causas de la deforestación. En el decenio de 1990, el Gobierno de Laos puso en marcha el Programa de Asignación de Tierras y Bosques (LFAP), que prohíbe el cultivo itinerante y dictamina cómo se deben manejar los diferentes tipos de tierras. Los estudios demuestran que, al contrario de lo esperado, el LFAP aumentó la inseguridad en materia de tierras y alimentos, la pobreza y la migración por causas económicas. Esto no contuvo la deforestación ya que las comunidades locales no eran la causa de la deforestación. (6) Más recientemente, el gobierno ha emitido reglamentaciones a nivel de provincia sobre el “Corredor de Conservación de la Biodiversidad” que establecen una aportación legal para administrar los llamados “corredores de biodiversidad”, que ya tiene un fondo de US12.8 millones de dólares aportados por el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). Se trata de un programa piloto del BAsD de la “gestión forestal sostenible” y la forma de preparar a los países para que accedan al financiamiento ofrecido por el programa de Emisiones Reducidas por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD). La planificación del uso de la tierra se ha llevado a cabo en 67 aldeas, abarcando 350,000 hectáreas de bosques donde se ha prohibido la agricultura itinerante practicada por las comunidades locales. (7)

Los acuerdos de libre comercio y de inversión juegan un papel importante en la conformación de leyes y políticas que facilitan la captación de tierra y agua para inversiones a gran escala, así como la deforestación y la degradación de los ecosistemas. Lo hacen indirectamente al alentar la producción especializada y verticalmente integrada de productos de exportación que conducen a la expansión de la minería y de las plantaciones de monocultivos a gran escala, y directamente forzando a los gobiernos a eliminar los obstáculos a la inversión extranjera. (8) Por ejemplo, en enero de 2016, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por su sigla en inglés) puso en marcha la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC, por su sigla en inglés), con la intención de crear un mercado único y una base de producción regional competitiva y plenamente integrada a la economía mundial. (9) Con el fin de facilitar la AEC, los gobiernos miembros de la ASEAN firmaron una serie de acuerdos que facilitan el acceso de inversionistas a gran escala a la tierra, los recursos naturales, las materias primas y la mano de obra, y brindan protección legal para su derecho a hacer negocios y obtener ganancias. No obstante, no existe protección alguna para las poblaciones locales que pierden sus tierras, bosques, fuentes de agua y medios de subsistencia frente a los avances de las obras de infraestructura y otros proyectos de inversión que se presentan como desarrollo.

En la región del Mekong, el Programa de Cooperación Económica de la Subregión del Gran Mekong (GMS, por su sigla en inglés), dirigido por el BAsD, pretende convertir las ricas dotaciones humanas y naturales de la región del Mekong en una zona de libre



comercio e inversión a través de ambiciosas inversiones multisectoriales en transporte (carreteras, autopistas, vías aéreas y fluviales), energía, expansión urbana, telecomunicaciones, turismo, facilitación del comercio y agricultura. Central al marco estratégico del GMS es el desarrollo de corredores económicos, que son bolsillos de inversión en infraestructura. Algunos corredores económicos van acompañados de “corredores de conservación de la biodiversidad”, como en Laos, Camboya y Vietnam, los cuales cubren dos millones de hectáreas de bosques y tierras no boscosas y sirven como el componente “verde” de la inversión en infraestructura. La estrategia agrícola del GMS pone énfasis en la integración de los agricultores de subsistencia de la región a cadenas de suministro regionales y mundiales controladas por empresas agroindustriales, y en reorientar la producción agrícola desviándola de la autosuficiencia hacia los mercados regionales y mundiales.

Independientemente del discurso sobre reducción de la pobreza y desarrollo sostenible, el modelo de desarrollo promovido y apoyado por gobiernos, donantes e instituciones financieras internacionales es cada vez más extractivista y genera desigualdad e injusticia. Este modelo se apropia de elementos de la naturaleza, del potencial humano y de las materias primas para beneficio de las empresas, y destruye los ecosistemas, las comunidades y las posibilidades de una vida digna. La violencia contra las personas y la naturaleza es parte integral de este modelo. No es de extrañar que en Asia las poblaciones locales se resistan a ese desarrollo; asumen enormes riesgos políticos y ponen en riesgo su seguridad para defender sus tierras, agua, bosques y ecosistemas contra el capital depredador que alimenta el extractivismo.

Shalmali Guttal, *Directora de Focus on the Global South*
Kartini Samon, *GRAIN*

- (1) Shalmali Guttal. *Introduction: Redefining Governance; Challenging Markets en Keeping Land Local: Reclaiming Governance from the Market*. Octubre 2014. <http://focusweb.org/landstruggles>
- (2) GRAIN. La contra-reforma agraria en Asia: nuevas leyes le arrebatan la tierra a los campesinos. Abril de 2015. <https://www.grain.org/article/entries/5214-la-contra-reforma-agraria-en-asia-nuevas-leyes-le-arrebatan-la-tierra-a-los-campesinos>
- (3) WRM. Nuevo ‘Plan Maestro Forestal’ de Tailandia: la misma estrategia con ropas nuevas. Boletín N° 208 del Movimiento Mundial por los Bosques, noviembre de 2014. <http://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/nuevo-plan-maestro-forestal-de-tailandia-la-misma-estrategia-con-ropas-nuevas/>
- (4) *World Economic Forum*. \$400 Million Fund Launched in Davos to Stop Tropical Deforestation and Boost Farming. Enero de 2017. <https://www.weforum.org/press/2017/01/400-million-fund-launched-in-davos-to-stop-tropical-deforestation-and-boost-farming/>
- (5) GRAIN. Cultivando desastres: las principales compañías del mundo van por la cosecha. Diciembre de 2016. <https://www.grain.org/article/entries/5623-cultivando-desastres-las-principales-companias-del-mundo-van-por-la-cosecha>
- (6) Por más información ver, por ejemplo, *Whose Lands Whose Resources?* Shalmali Guttal, *In Development*, 2011, 54(1), (91–97) 2011 *Society for International Development* 1011-6370/11 www.sidint.net/development/
- (7) Banco Asiático de Desarrollo. *ADB Grant Assistance to Support Sustainable Biodiversity Management*. Octubre de 2016. <https://www.adb.org/news/adb-grant-assistance-support-sustainable-biodiversity-management>
- (8) Lorenzo Cotula. *Tackling the trade law dimension of land grabbing*. *International Institute for Environment and Development*, 14 de noviembre de 2013. <http://www.iied.org/tackling-trade-law-dimension-land-grabbing>
- (9) <http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-economic-community/view/670/newsid/755/about-aec.html>



Conflictos forestales en Tailandia: el Estado contra el pueblo

La política forestal moderna de Tailandia ha tenido varias etapas. En el siglo XIX los británicos comenzaron a talar el país para la obtención de teca. En el siglo XX, otros madereros industriales llegaron para quedarse. Mientras tanto, los organismos estatales, con el objetivo de evitar que los movimientos insurgentes accedieran a los bosques, promovieron la agricultura comercial y las represas hidroeléctricas, así como la extracción de madera. Finalmente, en 1989, luego de que los antiguamente grandes bosques del país estuvieran gravemente devastados, se prohibió oficialmente la extracción maderera.

Aún así, a pesar de que en la etapa que siguió hubo mayor énfasis en la “conservación de los bosques” y la “reforestación”, la superficie de bosques del país siguió reduciéndose y los conflictos entre el gobierno y la población local aumentaron.

Estos conflictos tienen su raíz en parte en la celosa custodia jurídica del Departamento Forestal de Tailandia (*Royal Forestry Department*) sobre las enormes extensiones de tierras tanto boscosas como no boscosas. Más de 11.000 comunidades de todo el país viven en tierras que pertenecen oficialmente al Estado, las cuales abarcan un 57 por ciento del país. Además, aunque el Departamento de Tierras de Tailandia ha emitido varios tipos de documentos individuales sobre la tierra para más de 20 millones de hectáreas de los 51 millones de hectáreas de la nación, incluidas muchas tierras boscosas estatales, el 90 por ciento de estos derechos territoriales están en manos de menos del 10 por ciento de la población. El 38 por ciento de las tierras de propiedad privada - como mínimo -, y posiblemente mucho más, permanece improductivo. Eso hace que el conflicto sea inevitable: no sólo un millón y medio de familias tienen que arrendar tierras para cultivar sino que más de 800.000 familias campesinas no poseen tierra alguna.

Mientras tanto, la Ley de Re-forestación de 1993 ha legitimado que gran parte de las tierras estatales utilizadas por las comunidades campesinas sean adquiridas para establecer plantaciones de árboles de rápido crecimiento. Y ahora el Estado maneja otro argumento para desalojar a la gente de las tierras boscosas del Estado: que los aldeanos, con sus asentamientos, son los causantes del calentamiento global. Este artículo discute algunos conflictos en dos provincias del norte de Tailandia - Phetchabun y



Chaiyaphum -, donde las medidas oficiales de conservación del bosque han implicado la invasión de los asentamientos campesinos.

Phetchabun

La aldea de Huay Rahong, en la provincia de Phetchabun, en el norte de Tailandia, se estableció en el lugar desde 1971 y cuenta con más de 1.200 habitantes. La mayoría de los habitantes de Huay Rahong fueron expulsados de su pueblo - llamado Sambon -, cuando el gobierno creó el Parque Nacional Nam Nao en 1971. Otra aldea vecina, Huay Khonta, mucho más pequeña, se estableció en 1963.

El 26 de noviembre de 1999, el gobierno creó un santuario de vida silvestre llamado Phu Pa Daeng (*Red Cliff Mountain*) en terrenos que se superponen con los asentamientos campesinos y sus bosques circundantes, y dejó en claro su intención de desalojar a los aldeanos. Los residentes de la pequeña aldea Huay Waai, vecina a Huay Rahong, ya fueron desalojados sin haber recibido compensación alguna u otras tierras donde reasentarse. Funcionarios del Parque Nacional habían engañado a las familias prometiéndoles que recibirían una compensación si abandonaban su aldea. Dicha promesa, sin embargo, no tiene base legal porque los aldeanos no poseían título sobre la tierra y se hizo, a sabiendas del engaño, con el objetivo de que los aldeanos se fueran.

Huay Khonta también ha estado constantemente bajo amenaza. En 2005, cuando 13 residentes (incluidos niños y una persona discapacitada) fueron contratados por un vecino para cosechar el maíz en campos que se encontraban dentro del santuario de vida silvestre, el director del santuario presentó cargos por invasión ilegal. El juez desestimó el caso alegando que no estaba clara la situación de la pequeña parcela en cuestión (menos de una hectárea y media). Sin embargo, la sentencia fue revocada por el Tribunal de Apelación, lo que resultó en una sentencia de seis meses de cárcel (suspendida por dos años). El Tribunal Supremo confirmó luego la decisión del Tribunal de Apelación.

Los residentes de Huay Khonta también enfrentan una demanda civil por “provocar calentamiento global”, presentada por el Departamento de Parques Nacionales bajo la Ley Ambiental de 1992, que hace responsables a los contaminadores por daños y perjuicios. Normalmente aplicada a las industrias contaminantes, la Ley fue adaptada recientemente para utilizarla contra los campesinos pobres. Con la ayuda de académicos contratados, se elaboró una fórmula según la cual los agricultores de Huay Khonta podrían ser multados con hasta 26,250 dólares por hectárea por “provocar” aumento de temperatura, erosión, agotamiento de nutrientes del suelo y daño hidrológico. En definitiva, teóricamente los aldeanos tendrían que responder con hasta US 70.000 dólares por concepto de daños, una suma enorme para los estándares locales. En este caso, el 28 de diciembre de 2016 el tribunal multó a los acusados de Huay Khonta con US 3,562 dólares por hectárea, más un interés anual del 7,5 por ciento a partir de 2005.

Los aldeanos continúan impugnando lo que consideran una injusticia jurídica. No sólo presentaron una apelación ante los tribunales sino que también entregaron una creativa propuesta para un nuevo tipo de “título de tierras comunitarias”, que creen que puede resolver el problema pacíficamente en el largo plazo. La propiedad comunal de la tierra



reduciría el riesgo de que se vendieran tierras o de que se coaccionara a las familias para que renunciaran a la tierra si estuviera registrada bajo títulos de propiedad privada. La propuesta describe un proceso para que la comunidad establezca las reglamentaciones y se cree un comité dirigido por la comunidad para cuidar la tierra. Los ingresos percibidos por el uso comunitario de la tierra también contribuirían a un “Fondo de Tierras” que apoyaría a los miembros de la comunidad más necesitados.

Chaiyaphum

El conflicto sobre el proyecto de plantación de árboles Khonsarn, en la provincia de Chaiyaphum, data de 1978, cuando el Departamento Forestal de Tailandia autorizó a la Organización de la Industria Forestal (FIO - *Forest Industry Organisation*) a plantar eucaliptos en una zona en la que hay campos cultivados de la población local. FIO es una empresa estatal que depende del Ministerio de Agricultura y Cooperativas y fue creada en 1947, tras el vencimiento de las concesiones otorgadas a empresas madereras extranjeras. Históricamente su trabajo consistía en extraer madera a condición de replantar las superficies taladas.

Eso trajo problemas en Chaiyaphum, donde varias zonas de montaña que habían sido taladas se convirtieron en bastiones del Partido Comunista de Tailandia (CPT, por su sigla en inglés) hasta finales de la década de 1970. FIO no se atrevió a entrar en aquellas zonas, por lo que propuso, en cambio, reforestar en las zonas más bajas, incluyendo a la Reserva Nacional de Bosques Phu Sampak Nam establecida en 1973, parte de la cual se convirtió en santuario de vida silvestre en 2000.

Originalmente la plantación de eucaliptos estaba destinada a cubrir 3.200 hectáreas, pero finalmente se plantaron sólo 704 hectáreas debido a la resistencia de los ocupantes de la tierra. Aún así, durante 1986 la FIO siguió tratando de desalojar a los pobladores locales, apelando tanto a herramientas jurídicas como a la mafia local para presionarlos. Otra estrategia fue la propuesta de una “aldea forestal”, en virtud de la cual la FIO asignaría menos de una hectárea a cada familia participante para que construyera ahí su casa y tuviera un poco de tierra para plantar. Pero sólo terminaron participando 40 de las 102 familias que viven en las zonas en disputa.

En 2004, unos 277 hogares afectados por el proyecto de FIO formaron una red y exigieron que el gobierno cancelara la plantación y en su lugar asignara la tierra a la comunidad. Propusieron que el gobierno le otorgara a la comunidad certificados de tierra comunal y que reconociera que la comunidad tenía el derecho de poseer y administrar su propio bosque comunitario. Su propuesta incluye una pequeña parcela de tierra para cada uno de los hogares participantes donde construir una casa y producir alimentos, así como un bosque comunitario, tierras agrícolas comunitarias y tierras de uso público/comunitario. Hasta ahora, sin embargo, el gobierno no ha respondido.

En 2009, los pobladores locales recuperaron alrededor de 15 hectáreas de tierra donde la FIO había plantado eucaliptos en 2004. La reclasificaron en cuatro categorías para uso propio: terrenos residenciales y agrícolas, terrenos comunales, bosques comunitarios y terrenos para servicios públicos, tales como carreteras. La FIO respondió llevando a juicio a 31 personas ante un tribunal civil, lo que resultó en una orden que expulsó a los



acusados y sus familiares de la zona. Hasta ahora, los aldeanos se han negado a acatar esta decisión.

En 2014, los militares tomaron el poder en Tailandia, conformándose en el Consejo Nacional de Mantenimiento de la Paz (NPKC, por su sigla en inglés). La Política de Recuperación de Bosques del NPKC, cuyo objetivo es aumentar en un 40 por ciento la cobertura forestal del país, fue aprovechada por las autoridades provinciales de Chaiyaphum como base para ordenar a los habitantes de la aldea de Bo Kaew, en la zona de FIO, que dismantelaran su aldea en el término de 30 días. Sin embargo, los residentes de Bo Kaew han resistido hasta ahora la orden de desalojo, argumentando que el NPKC también se ha comprometido a no interferir con los medios de subsistencia de los campesinos pobres.

En abril de 2016, el líder local Den Khamlae desapareció mientras recogía alimentos en una zona cercana a su casa, y no se lo ha visto desde entonces. Den había insistido en que “los pobres no queremos ser procesados y quedar sin hogar y marginados en nuestro país”. Aunque la población local y la policía encontraron áreas quemadas y fragmentos de huesos en la zona entre el bosque comunitario de su aldea y el área de conservación estatal donde Den desapareció, no se ha informado que haya habido avances en la investigación del caso.

Mirando hacia el futuro

Bajo el régimen actual de Tailandia, los ciudadanos tienen aún más razón que antes para temer que sus tierras y bosques sean confiscados y entregados a grandes empresas y otros grupos dispuestos a compartir el botín con los militares.

Sin embargo, una red de la sociedad civil que incluye a comunidades de toda Tailandia que enfrentan problemas similares a los sufridos por los aldeanos de Phetchabun y Chaiyaphum, ha avanzado en la aprobación de cuatro leyes nuevas: una Ley de Títulos de Tierra Comunitaria; una Ley de Fondos del Banco de Tierras; una Ley del Fondo de Justicia; y una Ley de Tributación Progresiva que fijaría impuestos más altos a los terratenientes que no estén usando sus tierras.

De aprobarse, las cuatro propuestas legislativas ayudarán a resolver las disputas sobre la tierra y a reducir las desigualdades en la tenencia de la tierra. Incluso están contando con cierta aceptación por parte del gobierno, con la excepción de la Ley de Títulos de Tierra Comunitaria. Con respecto a los derechos de las comunidades sobre la tierra, el gobierno favorece sus propias propuestas más condicionadas, que implican el manejo de la tierra por las cooperativas y que no reconocerían los derechos de la comunidad en parques nacionales o santuarios de vida silvestre.

Oranuch Phonpinyo, The Northeastern Land Reform Network – Thailand

Por más información:

- (1) *The Land Institute Foundation of Thailand*
- (2) *Thai Civil Rights and Investigative Journalism*: <http://prachatai.org/english/category/news>
- (3) *Prachatai News*, 17 May 2013: <http://prachatai.com/journal/2013/05/46764>



Myanmar: nueva política que defiende los derechos indígenas ya corre peligro

En los últimos años se ha dado un proceso de cambio importante en Myanmar, de lo cual resulta significativa la victoria de la NLD (Liga Nacional por la Democracia) (1) en las elecciones de noviembre de 2015. Mucho menos conocida fuera de Myanmar, pero ciertamente igual de significativa, fue la promulgación en enero de 2016 de una nueva Política Nacional sobre el Uso de la Tierra (NLUP, por su sigla en inglés). La política fue dada a conocer como parte de la última iniciativa del gobierno saliente antes de que el poder fuera transferido al gobierno entrante de la NLD, en abril de 2016. La política en sí fue el resultado de un proceso de un año de consulta y revisión sin precedentes, supervisado en gran medida por el Ministerio de Medio Ambiente, Conservación y Forestación, bajo los auspicios de un organismo interministerial creado por el vicepresidente. Nunca antes visto en otros procesos políticos, se ha registrado que la NLUP tuvo un total de por lo menos 91 consultas públicas, incluidas 17 consultas encabezadas por el gobierno y por lo menos 74 por organizaciones de la sociedad civil en más de 40 municipios, e incluidos 4 grandes talleres de consulta a escala nacional. (2) Se prevé que la NLUP actúe como documento rector en la redacción de una Ley Nacional de Tierras y en la reforma de leyes existentes, como la anticuada Ley de Adquisición de Tierras de 1894 y la Ley de Administración de Tierras Vacías, en Barbecho y Vírgenes, que es la ley máxima que facilita la asignación de tierras indígenas consuetudinarias a los inversionistas.

El documento resultante es en gran medida un documento de compromiso que contiene 13 partes clave que delinean la política gubernamental en diferentes temas. Dichas partes incluyen aspectos generales tales como la administración y la planificación del uso de la tierra, y otros más específicos centrados en el otorgamiento de concesiones de tierras de propiedad estatal; los procedimientos relacionados con la adquisición de tierras; la indemnización por reasentamiento; la fijación de impuestos; el monitoreo y la evaluación de las tierras, así como, sobre todo, los derechos de uso de la tierra de las nacionalidades étnicas; y la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La NLUP ha sido criticada por algunos activistas por no ir lo suficientemente lejos como para detener las concesiones de tierras y las inversiones relacionadas con la tierra. No obstante, la NLUP es destacable porque establece importantes reformas en la gobernanza de la tierra que intentan reglamentar, restringir y sugerir soluciones políticas a muchos de los conflictos actuales en torno a la tierra, en especial el acaparamiento de tierras y la venta de tierras de concesiones y arrendamientos de tierras del Estado en tierras tradicionales de diversos grupos étnicos. De hecho, se podría decir que la política es un cambio



significativo del marco de gobernanza de la tierra verticalista de Myanmar. El fuerte reconocimiento de la tenencia consuetudinaria, si se aplica en la ley, apartaría a Myanmar de algunos de sus vecinos más autoritarios, como Vietnam, Camboya y Laos.

La NLUP en sí misma es importante porque contiene los siguientes principios básicos: “Reconocer jurídicamente y proteger los derechos legítimos de tenencia de la tierra de las personas, tal como lo reconoce la comunidad local, prestando especial atención a los grupos vulnerables como los pequeños agricultores, los pobres, las nacionalidades étnicas y las mujeres”. Cabe destacar aún más la importancia de la NLUP porque por primera vez pretende reconocer y proteger las reivindicaciones de tenencia de tierras tanto consuetudinarias como comunitarias. A este respecto, la parte 8 sobre los Derechos de Uso de la Tierra de las Nacionalidades Étnicas es la sección más importante, dedicada enteramente al reconocimiento y la protección de la tenencia de tierras de los grupos étnicos de Myanmar. El artículo 64 establece que “los sistemas de tenencia consuetudinaria de uso de la tierra serán reconocidos por la Ley Nacional de Tierras para asegurar la toma de conciencia, el cumplimiento y la aplicación de las prácticas tradicionales de uso de la tierra de las nacionalidades étnicas, el reconocimiento formal de los derechos consuetudinarios al uso de la tierra, la protección de esos derechos y la aplicación de mecanismos imparciales de resolución de disputas a los que se podrá acceder fácilmente”.

La sección Derechos sobre Tierras Étnicas continúa en esta línea. En sus 11 artículos reconoce prácticas consuetudinarias del manejo de la tierra; protege a las tierras étnicas de ser asignadas en concesiones de tierras; reconoce y protege sistemas de cultivo de rotación; reconoce la necesidad de que exista una participación real de las nacionalidades étnicas en las decisiones relativas a sus tierras; reconoce la importancia de los procedimientos consuetudinarios de resolución de controversias por la tierra; y establece principios básicos para la resolución de conflictos históricos en torno a la tierra y pueblos desplazados. De aplicarse en la legislación, estos cambios representarían un importante alejamiento de la actual gobernanza verticalista de las tierras tradicionales de Myanmar.

Cabe resaltar que la Parte 9 de la NLUP contiene un capítulo específicamente enfocado en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, que fue incluido después de mucho debate y cabildeo de grupos locales de la sociedad civil que trabajan por la igualdad de género en Myanmar. Las mujeres tienen una desventaja significativa en este país. Esto es una realidad, en particular, en temas relacionados con la tierra, que se considera en gran medida dominio de los hombres y donde es común que las mujeres no estén incluidas en los documentos de registro de tierras. (3) La Parte 9 de la NLUP no es extensa, consiste sólo de 2 artículos. Pero el artículo 75 enuncia 8 derechos específicos sobre la tenencia de la tierra que deben otorgarse a las mujeres. Éstos incluyen el derecho a poseer la propiedad en carácter individual o como co-propietario de un título; el derecho a la tierra cuando muere un cónyuge, o cuando la propiedad se divide en caso de divorcio; y el derecho a participar y representar a la comunidad cuando se trata de tomar decisiones relativas a la tierra.

La NLUP de 2016 parece ser el indicio de un cambio de rumbo sustancial del país hacia un sistema de gobernanza de la tierra más democrático y participativo, que respeta los derechos de las comunidades rurales y étnicas, las cuales desde largo tiempo atrás han reclamado frente al acaparamiento de tierras patrocinado por el Estado. Sin embargo, el



11 de noviembre de 2016, apenas 10 meses después de la aprobación de la NLUP, una oscura pero poderosa comisión del Parlamento Nacional conocida como la *Comisión Especial para el Análisis de Asuntos Legales y Especiales* (en adelante, Comisión Especial) presentó un memorando al Parlamento. El memorando, después de referirse al artículo 37 de la Constitución de 2008 - que fue redactado por los militares y declara al Estado como propietario original de todos los recursos naturales por encima y por debajo de la tierra - establece que la NLUP contiene 6 “hechos inapropiados e irrelevantes” que deberían ser retirados del documento y 6 elementos que “deberían necesariamente ser añadidos”.

En consonancia con el carácter secreto de la Comisión Especial (4), el memorando no se ha hecho público a pesar de que fue presentado al parlamento nacional. De hecho, la existencia del documento sólo fue conocido por los círculos vinculados a la reforma agraria semanas después a través de una breve mención en el periódico local en idioma inglés, *Myanmar Times*, lo que dio lugar a una investigación más profunda por parte de los organismos donantes. El documento está firmado por U Shwe Mann, Presidente de la Comisión, con fuerte poder político en el gobierno. Antiguo general, presidente del anterior partido gobernante USDP y vocero de la Cámara de Diputados del parlamento nacional del gobierno anterior, U Shwe Mann y su familia mantienen importantes intereses económicos en todo el país, en especial inversiones en el agronegocio. (5) Es importante destacar que U Shwe Mann es considerado un aliado cercano de la líder de la NLD y Consejera de Estado Daw Aung San Suu Kyi. En efecto, en la prensa se informó ampliamente en 2015 que U Shwe Mann fue purgado del partido político del USDP por estar demasiado cercano a la líder de la NLD. Aunque perdió su escaño en las elecciones de 2015, U Shwe Mann fue nombrado por la Consejera de Estado para la Comisión Especial, en lo que algunos consideraron una recompensa por haberla apoyado cuando intentó iniciar una reforma constitucional en la legislatura anterior. (6)

Mirando los 6 puntos que figuran como “hechos inapropiados e irrelevantes que deben ser excluidos”, el primer y el último punto son posiblemente los menos controvertidos. El primero refiere a la creación de una entidad que administre la información sobre la tierra, y el último a la eliminación de una referencia a la revisión del documento de política cada 5 años. El primer punto citado en el memorando se refiere al Artículo 18 de la NLUP, que propone una entidad “dedicada” a gestionar la información sobre las tierras de todo el país. Cuando se pronuncia en contra de esa entidad, la Comisión Especial aparentemente no se ha dado cuenta de que ese organismo ya existe en la forma del proyecto Un Mapa Myanmar (*One Map Myanmar*), que tiene como objetivo consolidar la data e información espacial relacionados con la tierra entre diferentes líneas ministeriales. (7) Sobre el último punto, la Comisión Especial sostiene que una actualización periódica de la política requeriría una actualización periódica de la ley y que eso sería inviable, aunque no se exponen las razones de dicha opinión. Dada la importancia de la política de tierras y la actual situación cambiante de Myanmar, parecería totalmente razonable revisar tanto la política de tierras como la ley cada 5 años.

La segunda cuestión identificada por la Comisión Especial para descartar se refiere a la referencia al establecimiento de tribunales especiales y un proceso de arbitraje tripartito independiente para la resolución de conflictos de tierras. El Artículo 42 de la NLUP propone ese sistema independiente de reclamaciones precisamente porque el marco jurídico actual ha demostrado ser insuficiente para resolver numerosos conflictos de



tierras. No hay un reconocimiento de las tierras comunitarias comunales, de la propiedad consuetudinaria de la tierra ni de la agricultura de rotación en el marco jurídico actual, y de hecho, la anteriormente mencionada Ley de Administración de Tierras Vacías, en Barbecho y Vírgenes legaliza actualmente la concesión de tierras comunales tradicionales y de tierras en barbecho a inversionistas privados. Al ordenar la supresión del órgano de arbitraje independiente (aún por establecerse), la Comisión Especial parece estar ya enviando una señal clara de que debe continuar el statu quo de la hegemonía estatal sobre la tierra.

La tercera cuestión que la Comisión Especial propone suprimir es tal vez la más preocupante: ¡la eliminación total de la Parte 8 referida a los derechos sobre la tierra de las nacionalidades étnicas! Como se explicó anteriormente, la Parte 8 es el capítulo principal de la NLUP, que da una orientación explícita en cuanto a brindar seguridad en materia de tenencia sobre los sistemas informales de propiedad de la tierra y los sistemas tradicionales de tenencia comunal y gestión de recursos naturales que predominan actualmente en la gobernanza de la tierra para las nacionalidades étnicas de Myanmar, en particular para las de las zonas altas de montaña. Sorprendentemente, la Comisión Especial justifica la eliminación de la Parte 8 con el argumento de que la legislación actual (específicamente las Leyes sobre Tierra e Ingresos; la Ley sobre Pueblos y Aldeas, la Ley de Administración de Tierras Vacías, en Barbecho y Vírgenes, la Ley sobre Tierras de Cultivo y la Ley Forestal) ya respeta los derechos consuetudinarios, los cuales, de hecho, son de competencia de los respectivos departamentos. No obstante, las palabras “consuetudinario” y “tradicional” no aparecen ni una sola vez, ya sea en la Ley Forestal (1992), la Ley sobre Tierras de Cultivo (2012), o la Ley sobre Administración de Tierras Vacías, en Barbecho y Vírgenes (VFV) (2012). Además, varios grupos que trabajan por los derechos étnicos critican la Ley VFV por considerar que es uno de los principales métodos mediante los cuales el Estado de Myanmar facilita actualmente la transferencia de tierras étnicas tradicionales y recursos naturales a inversionistas privados para emprender proyectos de desarrollo. Esto ha sido una fuerte fuente de conflicto entre el Gobierno de la Unión de Myanmar y los grupos étnicos. Además, el capítulo 8 es la única sección de la NLUP que específicamente reclama que una nueva Ley de Tierras reconozca la tenencia consuetudinaria y proporcione los medios para registrar legalmente los actuales acuerdos consuetudinarios en materia de tenencia de la tierra. La supresión del capítulo 8 socavaría considerablemente los regímenes tradicionales de tenencia de la tierra de personas pertenecientes a las nacionalidades étnicas, al no tener en cuenta sus particulares modos de vida y sistemas de gobernanza de la tierra.

La protección y el reconocimiento de la agricultura de rotación también están destinados a ser suprimidos por la Comisión Especial, que aduce que el sistema agrícola tradicional practicado por los grupos étnicos de las tierras altas “deteriora el ambiente natural”. La Comisión propone que el sistema sea “sustituido por prácticas agrícolas avanzadas, tales como el cultivo de tierras altas, el cultivo en terrazas, la agrosilvicultura”. El pedido de eliminar cualquier referencia a la protección de ese sistema tradicional deja de manifiesto la escasa comprensión de la complejidad de los regímenes de tenencia de la tierra en las zonas rurales del país. Esa eliminación también parece querer mantener la actual política de erradicación del cultivo itinerante, que ha fracasado, tanto en Myanmar como en toda la región. Los medios de vida de las nacionalidades étnicas, en particular las que viven en las zonas de montaña de Myanmar, son actualmente muy vulnerables debido a la inseguridad de la tenencia de la tierra en esas zonas donde no se



tienen en cuenta sus sistemas tradicionales de manejo de la tierra y los recursos naturales. Actualmente, esos sistemas tradicionales no están reconocidos o protegidos en la legislación de Myanmar y, al respecto, el capítulo 8 de la NLUP proporciona una orientación general para el desarrollo de futuros marcos de gobernanza de la tierra en torno no sólo al contexto particular de las nacionalidades étnicas que residen en las zonas de montaña sino también de los derechos de los titulares consuetudinarios. Las demandas de eliminar las referencias a la protección y el reconocimiento de los sistemas de cultivo de rotación, así como la supresión de los Derechos a la tierra de las nacionalidades étnicas, probablemente será percibida como una gran traición al carácter abierto y participativo del proceso de consulta de la NLUP. Además, de acuerdo a los observadores de Myanmar entrevistados por investigadores de campo del WRM, esta medida corre el riesgo de dañar la confianza de las organizaciones de la sociedad civil étnicas así como de representantes de grupos armados étnicos que actualmente trabajan con el gobierno de Myanmar para negociar un cese al fuego y un acuerdo de paz a escala nacional que ponga fin a los conflictos que han plagado Myanmar en los últimos 60 años. Más aún que el manifiesto electoral de la NLD se compromete a “resolver los problemas entre los grupos étnicos a través del diálogo basado en el respeto mutuo”. (8)

Por si el reclamo de eliminar los derechos étnicos a la tierra así como toda referencia a la protección y el reconocimiento de la agricultura itinerante no fuera lo suficientemente malo, la Comisión Especial pide además que se elimine toda referencia a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres con relación a la tenencia de la tierra, incluso en la Parte 8(a) de los principios básicos mencionados anteriormente, y presumiblemente también la Parte 9 sobre la “Igualdad de Derechos de Hombres y Mujeres”. En la extraña lógica de la Comisión Especial, el pedido de supresión de esas medidas se basa en el temor a que la unidad étnica se vea afectada, supuestamente porque los grupos étnicos desean seguir discriminando a las mujeres en cuanto a la propiedad de la tierra. No se ofrece evidencia alguna de eso. La afirmación se basa más en las opiniones personales de los miembros de la Comisión Especial - todos ellos hombres - que en cualquier otro tipo de evidencia empírica. De hecho, como las actividades en todo el mundo en ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo han subrayado una vez más, la situación actual de los derechos de las mujeres a la tierra, incluso en Myanmar, demuestra que es necesario crear conciencia sobre los derechos de las mujeres en la gobernanza de la tierra por parte de los organismos gubernamentales, en Myanmar y en otros lugares.

Después de reclamar la supresión de los puntos anteriores, la Comisión Especial establece a continuación 6 puntos detallados que deberían agregarse a la política actual. Algunos de ellos se refieren al funcionamiento de distintas entidades administrativas del gobierno. Sin embargo, el tono abrumador de muchas de las enmiendas propuestas se relaciona con mantener los intereses de las empresas y la capacidad del Estado para adquirir a la fuerza todas las tierras que considere necesarias. Los argumentos se resumen en la siguiente exposición de razones tomadas de la cláusula seis del memorando: “En cuanto al Estado, el propietario original de todos los recursos de la tierra, de ser necesario, tiene plenos derechos para adquirir y manejar tierras de interés público que deban ser incluidas en la política. Cambiar el uso de la tierra de agrícola a otras tierras y la monopolización de la tierra aumenta en gran medida los precios de la tierra y, por consiguiente, los inversionistas nacionales y extranjeros se enfrentan a dificultades. Por lo tanto, los gobiernos estatales o regionales o el gobierno de la Unión (de Myanmar) necesitan adquirir tierras pagando una compensación con valor fijo con



el fin de hacer uso de la tierra de manera eficaz y fructífera”.

En la actualidad no se sabe cómo seguirá la impugnación que hace la Comisión Especial a los deseos de reforma agraria de la mayoría de la población, expuestos en un extenso proceso de un año. El memorando de la Comisión Especial parece estar avanzando lentamente en el aparato gubernamental. Sin embargo, la pregunta que surge es qué impacto tendría el intento por parte del Gobierno de llevar a cabo de manera unilateral tales medidas sobre la confianza y la buena voluntad que, según informes, se creó entre el gobierno y los ciudadanos, la sociedad civil y los grupos de nacionalidad étnica que participaron en el proceso de consulta de un año sobre la NLUP. Por otra parte, tal medida ¿no sería como una bofetada ante los incipientes esfuerzos de un proceso de consulta nacional en torno a la formulación de políticas y leyes? Mirado de afuera, el ataque a la NLUP aparece como parte de una batalla más amplia entre quienes anhelan la tierra y la reforma agraria por un lado y los intereses comerciales que quieren mantener el statu quo por el otro.

Sin embargo, quizás lo más preocupante de este caso sea que un órgano parlamentario, en gran medida no elegido pero misteriosamente poderoso, parece ejercer una influencia significativa sobre la agenda de la reforma agraria de Myanmar. ¿Permitirá el gobierno de Myanmar que los deseos del pueblo sean anulados por una institución tan sigilosa?

Artículo compilado por la Secretaría del WRM, a partir de la información proporcionada por los investigadores de campo del WRM y la información citada a continuación

(1) NDL son las siglas en inglés de la Liga Nacional por la Democracia. El partido fue fundado en 1988 y actualmente es el partido de gobierno de Myanmar, con Daw Aung San Suu Kyi como Presidente and Consejero de Estado de Myanmar.

(2) Forbes, E., (2017). *Civil Society Participation in Land Policy Making: the innovative experience of Myanmar's pre-consultation on the National Land Use Policy. Mekong Regional Land Governance Project.* Vientiane and Yangon.

(3) Namati, (2016). *Gendered aspects of land rights in Myanmar: Evidence from Paralegal Casework.* págs. 5-6.

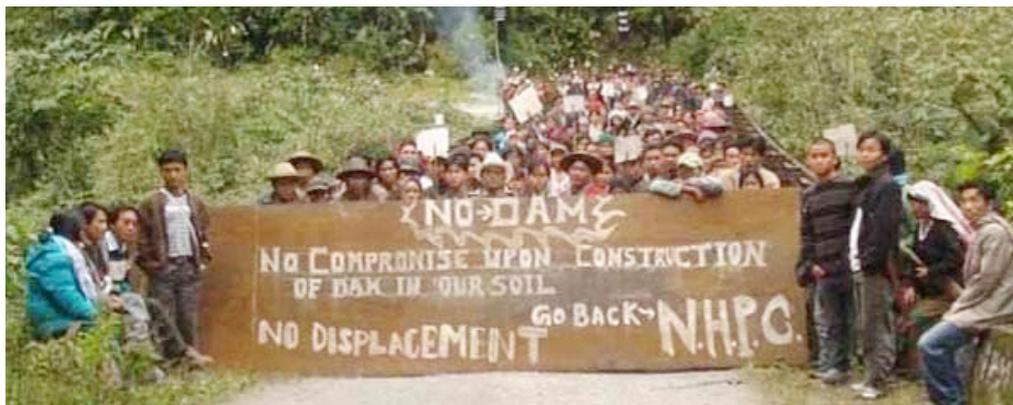
(4) <http://frontiermyanmar.net/en/law-reform-a-daunting-challenge>

(5) http://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=14151&page=3

(6) <http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/18853-thura-u-shwe-mann-appointed-to-head-own-legislative-commission.html>

(7) <https://cdeweb4.unibe.ch/Pages/News/149/OneMap-Myanmar-New-CDE-project-launched.aspx>

(8) http://www.burmalibrary.org/docs21/NLD_2015_Election_Manifesto-en.pdf



El bosque en el noreste de la India

La región típicamente conocida como “el noreste de la India”, o simplemente “el noreste”, está apenas unida a la India continental por un puente terrestre de aproximadamente 20 kilómetros de ancho, y rodeada por Nepal, Bhután, China, Myanmar y Bangladesh. Hay más de 200 comunidades indígenas y tribales que viven en esta región, la mayoría de las cuales comparten similitudes en materia de cultura, alimentación, vestimenta, economía y política. Todas han elaborado diversas leyes e instituciones específicas de cada tribu.

A pesar de la creciente urbanización, particularmente en las capitales, la vida de las comunidades continúa, definida en gran medida por la naturaleza. Las montañas, los bosques y los ríos componen sus vidas. Paralelamente, el Estado y las empresas siguen impulsando su agenda de “desarrollo”, mucho más ahora que el capital mundial y las industrias extractivas se trasladan a zonas remotas. En el contexto de impulsar una agenda de “desarrollo” se vienen redefiniendo el significado y los usos del bosque.

Según las estadísticas, en la mayoría de los estados de la región la cobertura forestal supera entre el 70 y el 80 por ciento. Es una de las pocas regiones ecológicamente diversas e intactas que aún subsisten en el planeta. Dentro de esos bosques están las comunidades, que allí viven y se desarrollan. Ellas “poseen” y “controlan” estas zonas de bosque bajo control comunitario. Los Estados no tienen autoridad directa en estos bosques comunitarios, excepto en las reservas estatales o áreas protegidas. Por ejemplo, el 77 por ciento de la superficie del estado de Manipur son bosques, pero de éstos solamente cerca del 7 por ciento está bajo el control del gobierno del estado. En el resto de la tierra de bosques, el control directo recae en las comunidades. Sin embargo, en Assam, grandes zonas de bosque fueron destruidas cuando agentes coloniales británicos trajeron plantaciones comerciales de té. Hoy en día las plantaciones de té ocupan 312.210 hectáreas en Assam, considerada la región de cultivo de té más grande del mundo.

Las plantaciones de cultivos comerciales, especialmente el caucho, aunque no son nuevas en la región, se tragan cada vez más zonas de bosque intactas. Las plantaciones de té y café se expanden hacia el bosque de montaña. En Tripura, segundo mayor productor de caucho natural de la India, ya se inició la destrucción de los bosques, que han comenzado a retroceder ante las nuevas 100.000 hectáreas de plantaciones de caucho. La expansión se está llevando a cabo en bosques tribales administrados por



autoridades locales. En los estados de Arunachal y Nagaland, también avanzan las plantaciones de caucho.

Otra expansión de plantaciones industriales es las de palma aceitera en Mizoram. El gobierno de Mizoram tiene como objetivo aumentar la superficie de las plantaciones de palma aceitera a alrededor de 150.000 hectáreas.

En Meghalaya, los impactos ambientales, y en particular la destrucción de los bosques por la minería de carbón y piedra caliza, han sido bien documentados logrando que el Tribunal Supremo prohibiera la minería de carbón. (1) El avance de las plantaciones comerciales y la minería a gran escala en tierras controladas por las comunidades ejerce también una gran presión sobre las sociedades y aldeas y provoca cambios en su naturaleza.

Las leyes e instituciones consuetudinarias que regulan los bosques de esta región difieren de una tribu a otra, pero tienen su base en la comunidad. Lo típico es que los jefes o el consejo de la aldea y/o del clan asignen la tierra del bosque a una familia para realizar allí agricultura itinerante (*jhum*). Si la parcela es abandonada, la tierra vuelve a la comunidad. No se permite la venta de tierras y las tierras comunitarias tampoco se heredan ni se transfieren como propiedad individual. Sin embargo, como resultado de presiones internas y externas han comenzado a darse tanto casos de venta de tierras como de transferencia de tierras a propiedad individual. Se sabe que actualmente algunos líderes tribales locales - a través de lo que se conoce como “certificado de no objeción” - han cedido tierras/bosque a empresas comerciales que presentan documentación de haber cumplido las salvaguardias ambientales y de otro tipo. Ha habido otros casos en que los consejos de aldea han retenido permisos de minería, brindando con ello una reconfortante demostración de que en ocasiones la autodeterminación funciona para el futuro.

La Ley de Tribus Registradas y otros Habitantes Tradicionales del Bosque (Reconocimiento de los Derechos Forestales) de 2006, es una política nacional progresista que busca reparar la injusticia histórica cometida contra las tribus y habitantes tradicionales del bosque. También se la ha llamado Ley de Derechos de los Bosques, Ley de Derechos Tribales, Ley Tribal y Ley de Tierras Tribales (ver [Boletín 205](#) del WRM). Esta ley ha reconocido y consagrado por primera vez, entre otras cosas, los derechos sobre los bosques y la ocupación de los mismos por las tribus registradas y otros habitantes tradicionales que han residido en esos bosques durante generaciones, pero cuyos derechos no pudieron ser registrados. Con la excepción de Assam y Tripura, los otros seis estados del noreste no han implementado esta ley, con el argumento de que ya existe propiedad comunitaria del bosque y se podría correr el peligro de que las leyes externas terminen invalidando las autoridades locales existentes.

Entre **los factores que pueden afectar profundamente al bosque de la región en los próximos años** figuran la expansión de la minería, las represas, las autopistas, las vías férreas, las obras de infraestructura, las plantaciones comerciales, las actividades relacionadas con el cambio climático.

La minería de carbón es un problema crítico en los estados de Assam y Meghalaya. Debido a sus graves impactos ambientales, el Tribunal de la Suprema Corte especializado en temas ambientales prohibió la minería de carbón por ahora (1). Un



derrame de petróleo provocado por las actividades de la empresa *Oil and Natural and Gas Corporation* (ONGC), en el distrito Wokha de Nagaland, dio lugar a la destrucción masiva de bosques y tierras de cultivo. (2) Las organizaciones locales han acudido a la corte reclamando indemnización y rehabilitación. Existen propuestas para realizar extracción de petróleo en los estados de Mizoram, Manipur y Arunachal. Todas estas propuestas implicarían la destrucción de zonas de bosque y su desvío para otros usos.

Además, el gobierno planea construir más de 150 represas, la mayoría de las cuales serán a gran escala. Sólo en el estado de Arunachal, el Gobierno ha firmado varios Memorandos de Acuerdos para la construcción de 127 represas en 42 ríos con unas 59 empresas dedicadas a la construcción de represas, con el objetivo de generar 42.591 MW de electricidad. Todas estas represas sumergirán grandes superficies de bosques densos e intactos. En Manipur se “canceló” la polémica represa Tipaimukh; su construcción habría sumergido 22.777 hectáreas de bosques. La oposición local sumada al clamor nacional e internacional facilitó esta decisión inusual de suspender una represa que habría sumergido una gran superficie de bosques, destruyendo así innumerables medios de vida vinculados con estos bosques.

Las carreteras, las vías férreas y la infraestructura son prioridades del plan del gobierno de la India para “abrir” la región. “Abrir” la cultura y la “belleza” de la región al turismo, “abrir” el bosque y su capacidad de almacenar carbono y proveer de medicinas tradicionales a la extracción de madera, “abrir” al saqueo de minerales y a la instalación de infraestructura que vincule a la India con la geopolítica y económicamente influyente región de la ASEAN. Actualmente se están construyendo dos obras clave de infraestructura: la carretera transasiática y el ferrocarril transasiático. Se planea la construcción de una importante red de petróleo y gas que conecta el sur de Asia con el sudeste asiático, y ya está en marcha una Red Regional de Energía. Todas estas obras de infraestructura tendrán consecuencias directas en el modo y los medios de vida de los pueblos de los bosques, y destruirán grandes extensiones de bosque.

Cambio Climático y Bosques

Si bien las formas de vida de las comunidades que dependen de los bosques, como las que se encuentran en el Nordeste, tienen uno de los niveles de emisiones de carbono más bajos, el cambio climático igualmente ya afecta su modo de vida y sus medios de subsistencia. Estos impactos se ven exacerbados por la implementación de dos tipos de actividades relacionadas con los bosques que se supone ayudan a mitigar el calentamiento global. Uno de ellos consiste en restaurar tierras supuestamente “degradadas” o “proteger” los bosques existentes considerándolos depósitos o sumideros de carbono; el segundo tipo de actividad son las plantaciones industriales para biomasa con destino a la obtención de agrocombustible o la generación de energía. Las plantaciones creadas para estos fines - normalmente extensas superficies de monocultivos, controladas y dirigidas por empresas - de ningún modo pueden ser consideradas un bosque.

Uno de los arquitectos de los proyectos de carbono forestal en el Nordeste es el Banco Mundial. Como parte de su estudio “El Nexo entre los Recursos Naturales, el Agua y el Medio Ambiente para el Desarrollo y Crecimiento en el Noreste de la India” (“*Natural Resources, Water and the Environment Nexus for Development and Growth in North East India*”) (3), el documento de antecedentes “La Financiación del Carbono y el Sector Forestal en el Noreste de la India” (“*Carbon Finance and Forest Sector in North*



East India”) claramente apoya y prepara el camino para convertir la agricultura y los bosques en proyectos más “rentables” de carbono forestal. Otro documento de antecedentes para el mismo estudio, titulado “Revisión del Sector Forestal del Noreste de la India” (“*Forest Sector Review of North East India*”), también apunta a programas de captura de carbono en la región. Con la clara intención del Banco de intervenir en el sector forestal en el Nordeste, es probable que el proyecto “NE Medios de Sustento” (“*NE Livelihoods*”) del Banco Mundial tendrá importantes proyectos relacionados con el carbono. Si el plan de los bancos es involucrar a todo el Nordeste en este proyecto, y si los sumideros de carbono son parte del proyecto de cada uno de los componentes del distrito, todo el paisaje y las comunidades del Nordeste se verán negativamente afectadas por esta falsa solución a la crisis del clima.

La organización *Community Forestry International* (CFI), con sede en los Estados Unidos, inició el Proyecto REDD+ Mawphlang como el primer proyecto piloto de la región en 2011. (4) El proyecto REDD+ está situado en las colinas East Khasi, en el distrito de Meghalaya y a veces CFI se refiere a él como el “Proyecto REDD+ de la Comunidad Khasi Hills”. La zona del proyecto abarca 15.217 hectáreas compuestas de aproximadamente 9.270 hectáreas de densos bosques y 5.947 hectáreas de bosques abiertos en 2010. El bosque incluido en el proyecto REDD+ es un antiguo bosque sagrado. CFI enumera una serie de ONGs y entidades locales como colaboradores: la sociedad de Betania, el Consejo del Distrito Autónomo de Khasi Hills, *Planet Action* y la Fundación Waterloo, con sede en el Reino Unido. La sociedad de bienestar local de Mawphlang *Ka Synjuk Ki Hima Arliang Wah Umiam* figura como proponente del proyecto junto a CFI. La Fundación Waterloo brindó un apoyo financiero de 100.000 libras esterlinas al proyecto para 2011-12. Según el documento del proyecto, los derechos de carbono de los bosques incluidos en el proyecto REDD+ son para la sociedad de bienestar local de Mawphlang *Ka Synjuk Ki Hima Arliang Wah Umiam*. El proyecto REDD de la comunidad Khasi Hills fue certificado en marzo de 2013 por Plan Vivo (Edimburgo, Reino Unido). En junio de 2013 se emitieron 21.805 certificados de compensación de carbono en el Registro Markit, una base de datos del sector privado que hace el seguimiento de la emisión de créditos REDD+. Los documentos del proyecto sugieren que el proyecto está entrando a su segunda fase de implementación desde 2017.

Mientras que los documentos en línea contienen toda esta información citada anteriormente, los verdaderos “dueños” del bosque no saben siquiera qué es REDD+. Numerosos aldeanos solían cultivar en las lomas, pero cuando comenzó el proyecto REDD+ tuvieron que buscar otros lugares para plantar sus cultivos. Este proyecto REDD+ trae muy pocos beneficios para los aldeanos.

Otro nuevo proyecto REDD+ que cubre una superficie de 44.391 hectáreas se localiza en los distritos de Aizawl y Mamit de Mizoram. Este nuevo programa se lleva a cabo conjuntamente por el Consejo indio *Indian Council of Forestry Research & Education* (ICFRE), *International Centre for Integrated Mountain Development* (ICIMOD) de Nepal y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ). (5) Al igual que con el proyecto REDD+ de Mawphlang, los aldeanos y los responsables de los consejos de aldea recibieron poca o ninguna información sobre el proyecto REDD+, su funcionamiento y sus implicaciones. Los proyectos REDD+ se presentan en los documentos como una salida al cultivo *Jhum*. También prometen que estas nuevas actividades de compensación del carbono forestal pueden atender las necesidades financieras de los



pueblos. En dos pueblos visitados hasta ahora por este autor, el bosque existente se conservó durante muchos años por iniciativa de la aldea, antes de la llegada del proyecto REDD+. El proyecto de carbono ha monetizado y “tomado el control del bosque” de los aldeanos, quienes trabajaron muy duramente y se comprometieron de manera voluntaria para proteger el bosque mucho antes de la llegada del proyecto REDD+. Ésta es una nueva era en la que las comunidades pierden el control sobre sus bosques en favor de organizaciones externas.

El segundo tipo de actividad promovida en nombre de la protección del clima que ha afectado los bosques y los medios de subsistencia de las personas del Nordeste son las plantaciones para agrocombustibles, en su mayoría jathropa. La Comisión de Planificación del Gobierno de la India estableció comités para promover las plantaciones para agrocombustibles; en el Nordeste, la empresa conjunta D1-Williamson Magor es la principal promotora de las plantaciones de jathropa. D1 Oils Trading Ltd., U.K. fue una de las primeras empresas en adquirir tierras para la producción de agrocombustibles, y Williamson Magor es el mayor grupo de plantadores de té de la India. Tienen grandes planes de expansión, no solamente de las plantaciones de jathropa en el Noreste sino en todos los países de Asia y África. Anunciaron sus planes de establecer 100.000 hectáreas de plantaciones de jathropa en el Noreste solamente, y los agricultores y los *Jhumias* (los aldeanos que practican agricultura itinerante) fueron seducidos con préstamos bancarios y garantías de respaldo. Pero, al igual que en otros lugares, el experimento de las plantaciones de jathropa parece haber fracasado, y los costos los soportan los aldeanos que deben hacer frente a los gastos, pero sin aceite de jathropa para vender y con los campos cubiertos con la planta venenosa. Las visitas de campo mostraron cultivos abandonados y tierras *Jhum* cubiertas de jathropa. Lo que es más desconcertante es cómo los aldeanos y comunidades menos responsables del cambio climático están siendo forzados a asumir la tarea clave de reducir sus escasas emisiones de carbono. Hay noticias de que se relanzará con mucha fuerza la expansión de los agrocombustibles. Si estos planes se materializaran, eso significaría malas noticias para el bosque y para la producción local de alimentos de subsistencia.

Ram Wangkheirakpam, Director Ejecutivo de *Indigenous Perspectives*, Imphal, Manipur

- (1) El artículo sobre la decisión del Supremo Tribunal por la que prohíbe la minería de carbono en el Noreste de la India está disponible en <http://www.downtoearth.org.in/news/meghalaya-suspends-rathole-coal-mining-44432>
- (2) <http://kanglaonline.com/2011/09/pil-seeking-rs-1000-crore-compensation-filed-for-oil-spill-in-nagaland/>
- (3) Estudio del Banco Mundial '*Natural Resources, Water and the Environment Nexus for Development and Growth in North East India*'; documento de antecedentes '*Carbon Finance and Forest Sector in North East India*'; y '*Forest Sector Review of North East India*'
- (4) REDD+ in India, and India's first REDD+ project: a critical examination. Informe de Soumitra Ghosh. Disponible en http://www.redd-monitor.org/wp-content/uploads/2011/11/03_Mausam_Sept-2011.pdf ; resumen y comentario por REDD-Monitor disponible en <http://www.redd-monitor.org/2011/11/29/indias-first-redd-project-in-the-east-khasi-hills-when-you-say-that-i-need-permission-to-cut-my-own-tree-i-have-lost-my-right-to-my-land/>
- (5) Mizoram seleccionó entre otros, para el proyecto REDD+ <http://www.mizoramtourism.org/mizoram-news/mizoram-selected-among-others-for-redd-project> y también ICFRE Initiatives sobre REDD+, las últimas 10 diapositivas se refieren al proyecto RED+ en Mizoram; disponible en: http://www.ignfa.gov.in/photogallery/documents/REDD-plus%20Cell/Modules%20for%20forest%20&%20Climate%20Change2016/Presentations/Resource%20Persons/TPSingh_IGNFA18Oct2016.pdf



Indonesia: leyes propuestas amenazan restablecer el control de las empresas sobre la agrobiodiversidad

En 2012, el Tribunal Constitucional de la República de Indonesia anuló artículos clave de una Ley de 1992 sobre Sistemas de Cultivo de Plantas. Estos artículos prohibían a los agricultores continuar con la vieja práctica de selección y cruzamiento de plantas - la práctica que justamente ha creado la inmensa agrobiodiversidad que existe actualmente. (1) Ahora, las leyes propuestas sobre Conservación y Biodiversidad y sobre Palma Aceitera amenazan con restablecer el tipo de control de las empresas sobre la diversidad de plantas de cultivo que los jueces del Tribunal Constitucional consideraron inconstitucional en su fallo de 2012. En conjunto, las dos leyes propuestas van aún más lejos: limitarán a las comunidades en cuanto al acceso, uso y cruzamiento de plantas protegidas por ley o sobre las cuales las compañías han registrado una patente.

Entre 1980 y 2000, el gobierno de Indonesia impulsó agresivamente una “modernización” agrícola simbolizada por el uso de fertilizantes químicos, semillas híbridas, plaguicidas, tractores y otras maquinarias pesadas. Como parte de esta “modernización”, el gobierno emitió la Ley No. 12 de 1992, sobre Sistemas de Cultivo de Plantas. La ley fue aprobada sin previa consulta a las asociaciones y comunidades campesinas, pese a que afectó significativamente su modo de vida. La ley prohíbe a los agricultores cruzar plantas que son utilizadas como cultivos agrícolas o plantas medicinales y sobre las cuales las empresas han registrado una patente. Sin embargo, la selección y el cruzamiento de semillas realizados por los campesinos ha sido parte integral de sus sistemas agrícolas y a la vez un pilar de la civilización.

A finales de 2011, numerosos agricultores que continuaron con la práctica de cruzar plantas alimenticias fueron demandados por empresas que reclamaban derechos de patente sobre esas plantas, y como resultado fueron condenados. La sentencia del Tribunal Constitucional N° 99 de 2012 anuló los artículos de la ley de 1992 que concedían a las empresas el monopolio sobre plantas y semillas utilizadas en la agricultura. Los campesinos pudieron nuevamente, sin riesgo de ser perseguidos, seleccionar y cruzar las plantas que usan, como siempre lo habían hecho.

En 2016 se presentaron dos proyectos de ley en Indonesia, uno sobre Conservación y Biodiversidad y otro sobre Palma Aceitera. El Proyecto de Ley de Conservación y



Biodiversidad vuelve a introducir el monopolio de las empresas sobre el cruzamiento vegetal, similar a los derechos de las empresas consagrados en los artículos de la Ley No. 12 de 1992 - los artículos que fueron anulados por el Tribunal Constitucional en 2012. Además, el proyecto de ley sobre Conservación y Biodiversidad prohibiría a las comunidades el acceso, uso o cruzamiento de variedades vegetales de especies que o bien están listadas en un Anexo de Conservación o para las cuales, por ejemplo, una compañía farmacéutica o de palma aceitera ha registrado una patente. Conforme al *adat* (derecho consuetudinario) se permite a las comunidades usar ciertas especies vegetales protegidas de uso tradicional, por ejemplo como medicamentos tradicionales, si las han registrado ante las autoridades gubernamentales como “recursos” genéticos para uso tradicional.

Las restricciones contenidas en el proyecto de ley son como dos caras de la misma moneda - sea cual sea la forma en que la mire, la ley pondrá en desventaja el *adat* de las comunidades. Si las comunidades utilizan las plantas sin autorización del gobierno, enfrentarán las correspondientes consecuencias penales; si las comunidades solicitan el permiso, existe un gran riesgo de que sus derechos intelectuales tradicionales con relación a las propiedades medicinales de las plantas sean robados por las empresas farmacéuticas antes de que se acepte que el conocimiento de las comunidades cumple con los requisitos legales del proyecto de ley. Las empresas están a la búsqueda de esa información sobre el uso medicinal tradicional de las plantas que las comunidades deben incluir en su solicitud para obtener el permiso de uso. Las comunidades podrían inicialmente recibir un permiso de uso, pero las compañías podrían registrar luego una patente y entonces la ley prohibiría el uso tradicional y el cruzamiento de la planta porque otra entidad (una empresa) ya ha registrado una patente para esta planta. Sea como sea, el proyecto de Ley de Conservación y Biodiversidad representa una amenaza enorme para el uso y cruzamiento tradicional de plantas por parte de las comunidades, ya sea para alimentos o medicinas.

Ya ocurrió que las compañías farmacéuticas se apropiaron del conocimiento que los pueblos indonesios tenían acerca de la fitomedicina tradicional. Las industrias comercializan y patentan la información sin el consentimiento de los usuarios tradicionales y de quienes poseen el conocimiento. Detalladas investigaciones académicas también se han valido de las fitomedicina tradicional utilizada para el tratamiento de diversas enfermedades. Esta investigación, así como la comercialización resultante, equivalen a robar la propiedad intelectual en la medida que la selección de determinadas hierbas para ser usadas como medicinas para el tratamiento de determinadas enfermedades, al igual que la composición y las prácticas utilizadas para preparar y aplicar estas medicinas tradicionales, son el resultado de una investigación continua realizada por miembros de las comunidades y transmitidos de generación en generación. Este conocimiento, sin embargo, no se acredita y no se reconoce como una investigación exhaustiva porque no se ajusta al enfoque académico contemporáneo.

El propósito de la ley propuesta sobre Palma Aceitera es definir la palma aceitera como una especie natural de Indonesia. Esto, sin embargo, escondería el hecho de que ha sido la industria del aceite de palma la que introdujo la palma aceitera en Indonesia -una especie autóctona de África Occidental y Central, donde se cultivan variedades tradicionales y se la utiliza para una amplia variedad de productos y usos. (2) En caso de ser considerada una especie natural de Indonesia, las empresas de plantaciones de palma aceitera podrían patentar la planta y, amparadas también en el artículo 15 del proyecto



de ley de Conservación y Biodiversidad, podrían restringir el uso que le dan las comunidades y limitarlo exclusivamente a la fruta - que la empresa tiene interés en comprar. Se podría entonces prohibírsele a las comunidades el uso de cualquier otra parte de la planta, una vez declarada especie natural de Indonesia, a la cual también se aplicaría la ley propuesta de Conservación y Biodiversidad. La declaración de la palma aceitera como especie natural de Indonesia equivaldría a un segundo acaparamiento de tierras para los agricultores que cultivan palma aceitera en sus tierras y para las comunidades que viven alrededor de las plantaciones comerciales, porque las empresas de palma aceitera podrían limitar su uso exclusivamente a la fruta - la parte de la planta en la que las empresas están interesadas. Una vez aprobadas estas leyes, también será más difícil para los agricultores reclamar sus tierras.

Los dos proyectos de ley, considerados en su conjunto, dejan en claro que la intención del gobierno no es resolver un problema urgente que afecta a las comunidades locales de Indonesia. Más bien, las leyes propuestas sirven para aumentar el control de las empresas sobre la agrobiodiversidad y las tierras que son de su interés. Estos cambios jurídicos deben ser vistos como parte de una estrategia empresarial, bien planeada y organizada, para expandir el control de las empresas, no solo sobre la tierra comunitaria sino también sobre el uso comunitario de la biodiversidad. La propuesta de reglamentaciones, tales como los dos proyectos de ley propuestos sobre Conservación y Biodiversidad y sobre Palma Aceitera en Indonesia, debe verse como parte del intento por legitimar la confiscación de las fuentes de vida de las personas. La aprobación de estas leyes también daría protección legal, si no impunidad, al robo que hacen las empresas de los conocimientos tradicionales sobre el uso de plantas que las comunidades han perfeccionado y transmitido de generación en generación. Aún cuando el Tribunal Constitucional de Indonesia ya había decidido la inconstitucionalidad de un monopolio empresarial sobre el cruzamiento y uso de plantas, el gobierno viene promoviendo la agenda de las empresas, proponiendo leyes que pretenden restablecer su monopolio sobre la agrobiodiversidad, las semillas y la diversidad genética de las variedades vegetales.

La comunidad o la sabiduría tradicional expresada en el *adat* así como la inmensa diversidad de variedades vegetales utilizadas hoy en día por las comunidades tradicionales y campesinas es indicio del largo proceso de adaptación entre naturaleza, diversidad de plantas y comunidades. Esta agrobiodiversidad, al igual que las comunidades que la produjeron, dependen del libre uso y acceso a la tierra que alberga las plantas que utilizan. Es este mismo uso y acceso a la tierra y a las plantas por parte de las comunidades lo que las leyes sobre Conservación y Biodiversidad y sobre Palma Aceitera ponen en riesgo.

El crimen de las empresas no puede ser entendido sólo como el acto delictivo de confiscar, robar o sustraer activos estatales. Más que eso, el control de las empresas a través de la protección de los derechos de propiedad intelectual y las leyes que les otorgan un monopolio sobre las plantas y las semillas ha confiscado las tierras de las comunidades así como sus conocimientos sobre el uso tradicional de estas tierras. Esos crímenes fuerzan procesos de cambio fundamentales a la interna de las comunidades: de ser poseedoras a convertirse en consumidoras, consumidoras de plantas y semillas que se han convertido en mercancías amparadas por patentes comerciales. Los proyectos de ley propuestos sobre Conservación y Biodiversidad y sobre Palma Aceitera son parte de



este proceso que intenta legalizar el robo de las empresas del conocimiento comunitario y uso tradicional de la “biodiversidad”.

Zenzi Suhadi

WALHI, Director del Departamento de Investigación, Defensa y Derecho Ambiental

(1) La decisión No. 99/PP-X/2012 del Tribunal Constitucional anuló los Artículos 5, 6, 9, 12, y 60 de la Ley No. 12 de 1992 sobre Sistemas de Cultivo de Plantas.

(2) Para tener una idea de la diversidad de usos de las variedades tradicionales de palma aceitera en África Occidental y Central, ver, por ejemplo, en inglés “Africa: another side of palm oil. A long history and vast biodiversity”, por GRAIN <https://www.grain.org/article/entries/5035-a-long-history-and-vast-biodiversity> y el video “Las mujeres de África occidental defienden el aceite de palma tradicional frente al acaparamiento de tierras”, <http://www.farmlandgrab.org/post/view/26164-video-las-mujeres-de-africa-occidental-defienden-el-aceite-de-palma-tradicional-frente-al-acaparamiento-de-tierras>



Camboya: luchando contra la maldición de las concesiones

El grupo Pheapimex es famoso en Camboya y en el extranjero por sus inversiones a gran escala, que le permiten acceder sin limitaciones a los bosques, la tierra y el agua. También es conocido por sus dueños, a quienes se les ha llamado “la pareja de poder”, por la influencia política y financiera que detentan. (1) El artículo a continuación, escrito en 2013, describe la Concesión Económica de Tierras de Pheapimex (ELC, por su sigla en inglés), que se extiende por las provincias de Pursat y Kampong Chhnang. La concesión alcanzó notoriedad por su tamaño masivo, la destrucción ecológica que ha causado y los conflictos generados con las comunidades locales sobre las tierras agrícolas, de pastoreo y forestales así como las fuentes de agua.

En 2016, después de 16 años de lucha, las comunidades afectadas de la provincia de Kampong Chhnang ganaron la batalla contra Pheapimex. La empresa acordó devolverles 170.000 hectáreas (de las 176.000 hectáreas aproximadamente del ELC) a los legítimos reclamantes. Según los residentes locales, la empresa estuvo en crisis debido a la caída de los precios de la mandioca, la rebelión de los trabajadores de las plantaciones y las tensiones entre los empleados de la compañía y las comunidades afectadas. Los trabajadores de las plantaciones no recibían un pago regular, por lo que comenzaron a sabotear las actividades de la compañía robando piezas de maquinaria. En gran medida, el propio gobernador de la provincia apoyó las demandas de tierras y bosques de las comunidades afectadas.



Pheapimex todavía no ha salido de Pursat, aunque también allí sus actividades parecen haberse reducido bastante. A diferencia de años anteriores, ahora hay solamente cinco lugares de trabajo con 20 o 30 trabajadores, y no hay trabajadores suficientes para atender la mandioca que ya fue plantada. En 2016 los trabajadores comenzaron a exigir el pago de los salarios atrasados adeudados por la empresa; informes recientes indican que el sabotaje contra la compañía parece haber comenzado aquí también. El ELC en Pursat cubre 130.000 hectáreas, de las cuales se han talado unas 30.000 hectáreas. Todavía no se sabe si la empresa retendrá toda la tierra de la concesión hasta completar el período de concesión o si devolverá las tierras en disputa a las comunidades afectadas, como acordó hacerlo en la provincia de Kampong Chhnang.

La situación con respecto a la concesión de Pheapimex en Kampong Chhnang es una victoria decisiva para las comunidades locales y también podría llegar a serla en Pursat. Sin embargo, la empresa y sus propietarios están lejos de estar derrotados en el país. Pheapimex tiene actividades conjuntas en la provincia de Monduliri con Wuzhishan LS, una empresa china de plantaciones, y con el Grupo Internacional de Desarrollo de Inversiones de Camboya (CIIDG, por su sigla en inglés), una empresa minera china. (2) Los propietarios de Pheapimex también son propietarios de la empresa Shukaku Inc., que trabaja en bienes raíces en el lago Beung Kak, y tienen una participación importante en una concesión minera de Alex Corporation, en Monduliri. (3) También están vinculados a Sinohydro (Cambodia) United Ltd, la empresa que se hizo cargo del contrato - ahora cancelado - para el proyecto de energía hidroeléctrica en Areng Valley, en las montañas de Cardamom. La concesión minera de CIIDG incluye las tierras tradicionales del grupo indígena Phnong, el cual ha expresado su preocupación por los impactos a sus bosques sagrados y cementerios. Los Phnong - que conforman aproximadamente la mitad de la población de la provincia - ya han enfrentado ese tipo de violaciones a sus derechos en las zonas de concesión de Wuzhishan LS, cuando sus tierras tradicionales fueron profanadas por las actividades de la empresa. Con el apoyo de una creciente red de activistas de los derechos comunitarios, la comunidad Phnong se está preparando para detener las actividades de la empresa antes de que perturben o violen sus dominios ancestrales.

En 2017 la maldición de las concesiones continúa en Camboya. Pero también las luchas de los pueblos. Al igual que los brotes y el bambú, a los que hizo referencia un residente de Krang Skea, en la provincia de Kampong Chhnang, en el artículo de 2013, sobre la lucha de las comunidades contra la concesión de Pheapimex, sus luchas para acabar con esta maldición, recuperar la tierra, el bosque y el agua y restaurar los ecosistemas dañados, se vuelven más fuertes.

Camboya: la maldición de las concesiones

Artículo publicado por primera vez en el [Boletín 193 del WRM](#), septiembre de 2013.

"La compañía prometió aumentar la cobertura forestal pero plantaron mandioca. La mandioca no es un árbol; una plantación de mandioca no es un bosque." Poblador de Ansar Chambor, Pursat, Camboya.

Desde el año 2000, los pobladores de más de 111 aldeas han estado luchando contra una gigantesca concesión de tierras que abarca 315.028 hectáreas y



atraviesa las provincias de Pursat y Kampong Chhnang en Camboya. El acuerdo de la concesión autoriza a Pheapimex – una poderosa compañía camboyana – a apoderarse de tierras agrícolas, forestales y comunitarias para plantar monocultivos de acacia y mandioca. El Grupo Pheapimex, propiedad de Choeung Sopheap y su marido Lao Meng Khin, un senador del Partido del Pueblo Camboyano (PPC), actualmente en el poder, es considerado por muchos camboyanos como virtualmente intocable por las estrechas relaciones que existen entre sus propietarios y el Primer Ministro de Camboya, Hun Sen y por las importantes donaciones de Pheapimex al PPC.

Aunque la ley vigente limita el tamaño de cada concesión de tierras a 10.000 hectáreas, Pheapimex adquirió su permiso en 1997, antes de que fuesen establecidas las leyes que regulan las concesiones de tierras para el desarrollo de actividades económicas. Inicialmente su plan era establecer una plantación de eucaliptus y fábricas de celulosa y papel. Para este fin la empresa se asoció con el Grupo de Cooperación Agrícola de China y tramitó el financiamiento del Banco de Exportaciones-Importaciones de China. Pheapimex es también el socio camboyano de la compañía forestal china, Wizhishan. Desde la aprobación de la referida ley, Pheapimex colabora con intermediarios y otras compañías que adquieren tierras dentro de los límites legales, pero en realidad constituyen parte de la gigantesca operación de Pheapimex.

Para el año 2002, la compañía ya había empezado a talar bosques y ocupar tierras agrícolas, a construir carreteras y canales y a acondicionar un vivero en la comuna de Ansar Chambor, distrito de Krakor, en Pursat. Como protesta, los pobladores de la comuna bloquearon carreteras y elevaron denuncias al gabinete real en Phnom Penh, la capital del país. Aunque el gobierno nacional no respondió favorablemente, las protestas locales pararon los trabajos en Ansar Chambor durante un corto lapso. Sin embargo la compañía continuó delimitando, desbrozando y apoderándose de tierras en otras zonas. En el año 2008, el vivero de Ansar Chambor ya estaba en pleno funcionamiento y Pheapimex había empezado a desalojar a los pobladores de sus tierras en otras zonas de la concesión, impidiendo el acceso de la población local a los bosques, plantando mandioca y acacia e instalando campamentos de obreros.

Desde entonces las operaciones de la compañía se han extendido y acelerado y se está trasladando maquinaria pesada, tales como topadoras y excavadoras, a través de toda el área de la concesión. Se nota claramente que esta expansión se está realizando por fases; sin embargo, las comunidades afectadas no reciben información previa sobre los planes de la compañía y a menudo son tomadas desprevenidas. La compañía se vale de distintos medios para asegurar la “cooperación” local, desde coimas y engaños hasta intimidación, violencia y encarcelación.

En el año 2010 Pheapimex organizó una ceremonia de “entrega de obsequios” en Ansar Chambor, en la que se entregaron arroz, fideos instantáneos y krumahs (pañoletas tradicionales) como testimonio de las buenas intenciones de la compañía. A continuación las autoridades gubernamentales alabaron los esfuerzos de Pheapimex por llevar prosperidad a la zona y ordenaron a las



comunidades que cooperaran ya que eran las destinatarias de la generosidad de la compañía.

Las autoridades del distrito y de la comuna han informado a las comunidades afectadas que no pueden cuestionar o parar a Pheapimex, y que los pobladores deberían aceptar cualquier indemnización que quiera pagar la compañía. Pheapimex utiliza en forma rutinaria su propia seguridad privada armada, así como policía comunitaria armada y policía militar para “proteger” la propiedad de la compañía frente a las protestas locales. Aunque la policía local se identifica con las comunidades afectadas, tienen órdenes de proteger a la compañía y no a las comunidades

Empobreciendo al pueblo

"Antes de que instalaran la plantación, aún con 100 hectáreas de tierras agrícolas se podía sustentar a cientos de familias. Sin embargo ahora, se han entregado miles de hectáreas a una sola compañía y (este arreglo) ni siquiera da para alimentar a una familia adecuadamente." Poblador de Psach Latt, Pursat, Camboya.

Los testimonios de las comunidades afectadas demuestran que la concesión de Pheapimex está robando al pueblo camboyano su patrimonio y riqueza natural, empobreciendo a las comunidades que están dentro de las áreas de la concesión y en los alrededores y eliminando las opciones de subsistencia de las generaciones futuras. Las áreas otorgadas a Pheapimex incluyen tierras agrícolas, de pastoreo, humedales, bosques, montes, lagos y cuencas, los que constituyen un sistema de infraestructura natural que nutren y de la que dependen los pobladores locales para su supervivencia y su bienestar cotidiano. Con la pérdida de tierras de pastoreo, las familias afectadas empezaron a vender sus vacas y sus búfalos, una de las importantes formas tradicionales de riqueza en Camboya.

La tala de bosques para la concesión está destruyendo la biodiversidad y los ecosistemas locales, incluidos valiosos bosques primarios, fuentes de agua, peces y vida silvestre. Están desapareciendo árboles económicamente valiosos (tales como los Knyung Beng, Neang Nun, Chheu Krom, Khnong y Phchek), la vida silvestre ha perdido hábitats, y las cuencas se han visto severamente reducidas. La compañía ha anegado estanques, cortado arroyos y desviado las aguas hacia sus viveros y plantaciones por medio de canales. Algunos arroyos se han secado por completo. Los pobladores locales temen que esto afectará la pesca local, particularmente en el Lago de Tonle Sap. Los ríos y arroyos aportan nutrientes a los peces y muchos de ellos viajan río arriba para desovar. Al bloquear arroyos y estanques, la salud y calidad integral de la pesca se deteriorará. La agricultura también se ha vuelto más difícil: los pobladores no pueden cultivar hortalizas y otros cultivos comerciales en sus huertas ya que la compañía domina el acceso al agua. Sin cobertura forestal, las aguas pluviales drenan más rápidamente, no se controla la erosión de los suelos y los pocos arroyos que quedan se vuelven más llanos.



Los bosques y montes constituyen importantes ‘alacenas’ de alimentos y medicamentos para las comunidades afectadas, así como fuentes de combustibles, materiales de construcción y productos forestales no madereros, tales como hongos, brotes de bambú y de ratán, miel, viñas, resinas, raíces, hierbas silvestres y frutas. Además los bosques tienen importantes valores culturales y religiosos para las comunidades afectadas: la compañía ha talado bosques sagrados, bosques de espíritus donde se realizan rituales tradicionales para pedir paz, buenas cosechas, prosperidad y salud. Las comunidades han perdido más de 6000 hectáreas de bosque, identificados como bosques comunitarios en Ansar Chambor y Kbal Trach (Pursat). Los pobladores de Kbal Trach estiman que la pérdida de ingresos sólo de los productos forestales no madereros para cada familia supera un millón de riel (US\$245) por temporada.

A medida que las familias aumentan de tamaño, las nuevas generaciones necesitan tierras para cultivar: estas tierras ya no están disponibles. Una iniciativa para conceder títulos de tenencia de tierras en y alrededor de las concesiones, iniciada por el Primer Ministro Hun Sen en 2012 (conocida como Directiva 01BB), estableció un tope de 5 hectáreas de tierras como huertas y arrozales respectivamente para cada adulto, aunque la cantidad de tierra con títulos es mucho menor en la mayoría de las aldeas afectadas por la concesión de Pheapimex. Aún este límite de 5 hectáreas ignora las necesidades de tierras de aquellos que todavía no son adultos, pero que llegarán a serlo dentro de unos años.

Sumidos en la desesperación, numerosos pobladores buscan empleo en las plantaciones, donde se pagan sueldos bajos – 600.000 riel o US\$147 por 30 días de trabajo –, los pagos son irregulares y en deficientes condiciones de trabajo. Hoy en día muchas de las familias deben subsistir con el sueldo de un integrante de la familia en la plantación, lo que no puede sustentar a una familia entera que antiguamente cubría su alimentación y percibía ingresos de los arrozales, las huertas, los bosques y arroyos. Como resultado, el endeudamiento aumentó, la emigración se incrementa y las familias se desintegran a medida que sus integrantes se van a las ciudades o a la vecina Tailandia en busca de trabajo.

Continuando con la lucha

Desde que se enteraron de la concesión, los pobladores de las comunidades afectadas han intentado defender sus tierras, bosques, subsistencia y vidas de distintas formas. Han protestado en las oficinas comunitarias, de distrito y provinciales, han cortado el tránsito de la Ruta 5 para concitar apoyo público, impidiendo que las máquinas limpiasen tierras agrícolas y bosques y han elevado quejas a las autoridades en todos los niveles. Han realizado ceremonias de oración pidiendo justicia en las comunidades, pagodas y frente a las oficinas públicas.

La movilización y organización popular en los ocho distritos abarcados por la concesión constituyen un enorme desafío para los pobladores locales, quienes simultáneamente están intentando alimentar a sus familias y cubrir sus



necesidades. La concesión es gigantesca, no sólo en tamaño sino también en dinero y poderío político. Aquellas personas que protestan son tildadas de “incitadores”, arrestadas bajo falsas acusaciones, encarceladas y multadas con grandes sumas de dinero. Aunque muchas de ellas están exhaustas y desalentadas, otras ven una esperanza de cambio a largo plazo. Las recientes elecciones nacionales demostraron que existe una pérdida de apoyo general del PPC y es probable que la masa de las bases del PPC se esté debilitando en los lugares donde los conflictos de tierras y bosques son mayores.

En las palabras de un poblador de Krang Skea (Kampong Chhnang): "Somos como el bambú que empieza con un brote, tenemos que esperar que haya más brotes y que el bambú crezca."

Shalmali Guttal, Directora de *Focus on the Global South*, <http://focusweb.org/>

- (1) *Cambodia's Top 10 Tycoons*. <http://investvine.com/cambodias-top-10-tycoons/>
 (2) *Miner Encroaches on Ancestral Lands*. <http://www.rfa.org/english/news/cambodia/bauxite-06222011171620.html>
 (3) *Pheapimex ties 'cause for concern'*. <http://www.phnompenhpost.com/national/pheapimex-ties-cause-concern> and <https://sahrika.com/2016/12/20/villagers-wary-of-mkiri-mine-project/#more-27000>



Malasia: grupos indígenas de todo el mundo adoptan declaración contra represas

En diciembre de 2015, los pueblos indígenas de Sarawak, Malasia, celebraron una gran victoria: el gobierno estatal anunció una moratoria y, en 2016, canceló la controvertida represa Baram. (4) La lucha contra la represa ha sido una inspiración para muchos y ocupó un lugar destacado en la discusión sobre “¿Qué está pasando con nuestros bosques en Malasia?”, presentada en la reunión celebrada en Bangkok en noviembre de 2016, citada en el editorial de este boletín. Por eso volvemos a publicar este artículo, sobre una reunión internacional de activistas anti-represas que se reunieron en las orillas del río Baram en octubre de 2015, unos meses antes de que el gobierno anunciara la moratoria sobre la construcción de la represa Baram.



Artículo publicado por primera vez en el [Boletín 220 del WRM](#), noviembre 2015.

Indígenas de todo el mundo que combaten las represas se reunieron el 23 de octubre de 2015 sobre las orillas del río Baram en Sarawak, un estado de Malasia en la isla de Borneo, para solidarizarse con quienes luchan contra el proyecto de la represa de Baram. Ese día, los dos bloqueos contra la represa de Baram celebraron su segundo aniversario. La represa de Baram sumergiría más de 400km² de bosques y desplazaría hasta 20.000 indígenas, y todo eso por una electricidad que ni siquiera es necesaria: Sarawak ya tiene exceso de energía. Gracias a los bloqueos, las obras de construcción de la represa de Baram, así como el camino de acceso a las mismas, se han detenido por completo en los últimos dos años.

Delegaciones indígenas de Indonesia, Filipinas, Camboya, Brasil, Estados Unidos, Honduras, y de toda Malasia se reunieron en Sarawak para compartir sus experiencias, fortalecer los vínculos entre sus comunidades y elaborar una declaración común sobre las represas. El evento de una semana fue llamado Cumbre Mundial Indígena sobre el Ambiente y los Ríos (WISER, por su sigla en inglés) y fue organizado por *SAVE Rivers*, una red de los movimientos de base de Sarawak (1).

Baram para todos, todos para Baram

Los participantes de WISER visitaron varios lugares significativos de la resistencia contra la represa Baram, tales como los dos sitios donde se realiza el bloqueo y el sitio donde se proyecta instalar la represa. Peter Kallang, presidente de *SAVE Rivers* y anfitrión de WISER, explicó: “Nosotros, los de *SAVE Rivers*, quisimos que los participantes experimentaran nuestra cultura y vieran por sí mismos la belleza de nuestro río Baram, para que entiendan mejor lo que está en juego y por qué luchamos”.

En el sitio donde se propone instalar la represa, al que se llegó en barco, Peter Kallang contó una anécdota: “En 2012, la compañía eléctrica y constructora de la represa, *Sarawak Energy*, organizó un ritual indígena tradicional de oración en el sitio donde se proyecta construir la represa de Baram, para bendecir la construcción. Las comunidades locales reaccionaron de inmediato y con sus botes organizaron un desembarco en el sitio como protesta ante este uso indebido de nuestros rituales tradicionales. Ése fue un momento clave en la movilización contra la represa”.

La historia de la defensa del río Baram encarna el destino de numerosos grupos indígenas amenazados por las represas. La hondureña Berta Cáceres, ganadora del Premio Ambiental Goldman 2015 (2), quedó asombrada por las similitudes de las amenazas que enfrentan las comunidades y destacó la importancia de WISER: “Esta cumbre sobre los Pueblos Indígenas y los ríos tiene un valor especial; sus acciones fortalecen la resistencia histórica de nuestros pueblos y hace visible la gravedad de las agresiones y los conflictos generados por la privatización de los ríos y la construcción de represas dentro de comunidades y regiones indígenas”.



La declaración WISER Baram 2015

Se realizaron talleres en Tanjung Tepalit, una de los 26 poblados que quedarían inundadas por la represa de Baram. Los participantes discutieron sus motivaciones para luchar contra las represas, las dificultades de sus campañas así como estrategias exitosas de movilización y para avanzar en su respectivas luchas.

James Nyurang, ex jefe de Tanjung Tepalit y anfitrión de la delegación internacional, piensa que la cumbre sirvió para fortalecer al pueblo Baram para que continúe su lucha: “La posibilidad de estar junto a todos los delegados compartiendo y discutiendo diversas estrategias para contrarrestar las dificultades que plantea la tarea de detener todas las represas innecesarias del mundo, me permitió aprender de la enorme experiencia de los delegados. Y con toda esa información confío que esas experiencias serán fundamentales para nosotros - el pueblo de Baram - y para nuestras estrategias para seguir luchando y detener la represa de Baram”.

Los debates culminaron con la adopción de una declaración sobre las represas y los derechos de los Pueblos Indígenas ([WISER Baram 2015 Declaration on Dams and the Rights of Indigenous Peoples](#)). (3) La declaración da cuenta del sufrimiento y la destrucción generalizada causada por las represas. Se les pide a gobiernos, empresas e inversores que no continúen con los proyectos que no hayan obtenido el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, que ratifiquen y apliquen la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), así como el Convenio 169 de la OIT, y que en los contextos rurales pongan en práctica alternativas de energías renovables en pequeña escala. La declaración también exige reparación para las comunidades que sufrieron como consecuencia de las represas, así como estudiar la posibilidad de eliminar las represas.

Los participantes enfatizan que ya no es posible presentar a las represas como climáticamente neutrales. Berta Cáceres, quien está en lucha contra la Represa Agua Zara en Honduras, declaró en la conferencia de prensa final de WISER, en el pueblo de Miri: “Hacemos un fuerte llamado a la próxima Cumbre sobre el Cambio Climático a realizarse en París, a escuchar y respetar a los pueblos indígenas y a las alternativas al cambio climático que ofrecen nuestras comunidades”.

Las luchas y esperanzas

Todos los participantes comparten el sufrimiento causado por la pérdida de la cultura y las tradiciones, así como los entornos naturales de los que ellos y sus comunidades son parte, la exclusión en la toma de decisiones e incluso la criminalización y militarización.

Pero también hay historias de éxito: Kundy Doeam y Dinith Yoen, de Camboya, explicaron cómo llegaron a una moratoria sobre la represa de Arenga a principios de este año, después de una campaña intensiva con



bloqueos y una campaña en bicicleta, entre otros. Sammy y John Luke Gensaw, de la tribu Yurok en California, Estados Unidos, explicaron que si bien las cuatro represas en el río Klamath todavía se mantienen en pie y amenazan al salmón, base del sustento de la tribu Yurok, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a dismantelar las represas en otros lugares. A partir de eso, los ecosistemas se están recuperando sorprendentemente rápido.

El pueblo de Baram también tiene cada vez más esperanzas de que finalmente se suspenda la construcción de la represa. En primer lugar, la resistencia ha crecido considerablemente y los bloqueos fueron eficaces en cuanto a detener el proyecto. En junio, Peter Kallang y Daniel Kammen, profesor de la Universidad de Berkeley, en California, se reunieron con el Ministro Principal de Sarawak, Adenan Satem, para discutir fuentes de energía alternativas a las represas. En septiembre, Adenan Satem anunció una moratoria a la represa de Baram.

Sin embargo, la historia de Daniela Da Silva sobre la represa de Belo Monte en la Amazonía brasileña nos recuerda la fragilidad del éxito. Daniela contó cómo a finales de 1980, las protestas generalizadas lograron frenar la represa Kararao, anterior a la de Belo Monte. Pero más tarde el gobierno la resucitó y la rebautizó. Ni siquiera los numerosos fallos judiciales en contra del proyecto pudieron detener su finalización. Lamentablemente, a menudo algunos proyectos de represas que se presumen muertos son resucitados por gobiernos sin imaginación.

Anna Aeberli

Bruno Manser Fund, www.bmf.ch/en

- (1) *SAVE Rivers* fue fundada hace cuatro años como una red de comunidades para luchar contra al menos 12 represas propuestas por el gobierno de Sarawak. La represa de Baram pronto se convirtió en el proyecto más polémico del grupo.
- (2) El Premio Ambiental Goldman distingue a los ambientalistas de base y les brinda reconocimiento por sus esfuerzos para proteger el medio ambiente, a menudo con gran riesgo personal. Sólo meses después de haber hablado en la reunión a orillas del río Baram sobre la lucha del pueblo Lenca contra la represa de Agua Zarca en Honduras, Berta Cáceres fue asesinada dentro de su propia casa <http://wrm.org.uy/actions-and-campaigns/Global-action-justice-for-bertha-caceres-junio-15-2016/>.
- (3) La declaración puede leerse en: http://www.stop-corruption-dams.org/resources/wiser_baram_2015_declaration_signed.pdf
- (4) (3) El milagro de Baram: se descartan oficialmente planes de construcción de la represa. Noticias del Fondo de Bruno Manser. <http://bmf.ch/es/news/the-baram-miracle-dam-plans-officially-scrapped>



ALERTAS DE ACCIÓN



Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta. En este país, más de 120 personas han sido asesinadas desde 2009 por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen los bosques, revela un informe publicado por *Global Witness* en enero de 2017. En el informe se rinde homenaje a la defensora de los derechos humanos [Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016](#) por varios hombres armados que irrumpieron en su casa a mitad de la noche y la mataron. Berta Cáceres se movilizó contra la represa hidroeléctrica Agua Zarca en las tierras de su

comunidad en Intibucá, al oeste de Honduras, que amenazó una fuente de agua vital y sagrada para el pueblo Lenca. El informe está disponible en inglés en:

https://www.globalwitness.org/documents/18726/Defenders_Honduras_full_report_Spanish_spreads.pdf



Guyana Francesa: El gobierno francés promueve calladamente la industrialización de la minería de oro en Guyana Francesa. Si sigue adelante, el proyecto Montagne d'Or, que comenzará la minería en 2018, pasaría a ser la mina de oro más grande en suelo francés. No sólo tendrá graves impactos humanos y ambientales sino que también abrirá las puertas de la Guyana Francesa a otras multinacionales mineras y expandirá la minería exclusivamente para el mercado de la joyería de lujo. La demanda industrial de oro representa sólo el 8% del oro actualmente extraído. El

sector de reciclaje suministró tres veces esa cantidad en 2015. Apoyemos al colectivo *Or de question*, una alianza de ONGs locales y nacionales que reclaman al gobierno francés la cancelación inmediata de los proyectos de mega-minería. Más información sobre esta lucha contra la minería en Guyana Francesa en

<https://sites.google.com/site/maiourinature/or-de-question-cp22fev>

Firma la petición en: <https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1084/no-to-industrial-gold-mining-in-the-forests-of-french-guiana#letter>



Investigación de la BBC revela saldo mortal de la política de tirar a matar en las reservas de tigres en la India. En todo el mundo los pueblos indígenas se enfrentan a arrestos, hostigamiento, tortura y muerte en nombre de la conservación de la naturaleza. El Parque Nacional de Kaziranga, en la India, es un infame ejemplo de esta tendencia inhumana. Cincuenta personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por los guardias del tristemente célebre parque nacional, donde en los últimos tres años se “tira a matar”. Las



comunidades tribales son golpeadas, torturadas y asesinadas a manos de funcionarios del parque fuertemente armados. El año pasado, los guardias dispararon a un niño de 7 años que ahora está mutilado de por vida. Esta violencia se hace en nombre de la conservación. Grandes organizaciones conservacionistas como WWF, *Wildlife Conservation Society*, *The Nature Conservancy* (TNC) y *Conservation International* (CI), entre otras, han ignorado los pedidos de que condenen esa práctica. Más información (en inglés) en: <http://www.conservation-watch.org/2017/03/10/indias-kaziranga-national-park-and-the-streisand-effect/>

Súmate a la Alerta para la Acción de *Survival International* y reclama a las autoridades gubernamentales de la India que pongan fin a la política de tirar a matar en áreas protegidas en: <http://www.survivalinternational.org/emails/shoot-on-sight>

Las balaceras del Parque Nacional de Kaziranga no son un incidente aislado, revela la película “El Juego del Tigre”. El gobierno de la India ha anunciado sus planes de expandir esta política en las reservas de tigres en la India. La película *El Juego del Tigre* (*The Tiger Game*) del activista y cineasta indio Soumitra Ghosh, denuncia que la situación en el Parque Nacional de Kaziranga no es un incidente aislado y que la política ya es una realidad en la Reserva de Tigres de Buxa, en Bengala Occidental. La película explora múltiples y coincidentes historias de explotación, crueldad e injusticia, asesinatos atroces de integrantes de comunidades tribales por parte de empleados del servicio forestal, en nombre de la conservación de la vida silvestre. La película (en inglés) está disponible en: <https://vimeo.com/124188855> .



Malasia: Dejemos de reconocer las plantaciones como bosques, expresó carta a la FAO. El 21 de marzo de 2017, la Asociación de Consumidores de Penang (CAP) y Sahabat Alam Malaysia (SAM), dos ONGs de Malasia, se unieron a la acción mundial contra la definición de bosques de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Alrededor de 200 grupos han renovado el reclamo a la FAO de que enmiende su engañosa definición de bosques, que ha permitido la expansión de las plantaciones industriales de árboles.

En la carta se pedía a la FAO que dejara de reconocer a las plantaciones como bosques, como se establece en la definición, porque esto ha permitido a la industria forestal ocultar los devastadores impactos ecológicos y sociales de los monocultivos a gran escala detrás de la imagen positiva que tienen los bosques en la percepción pública.

<http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/03/21/stop-recognising-plantations-as-forests-un-body-told/>

La carta enviada a la FAO puede leerse [aquí](#). También está disponible en inglés, francés y portugués. Por más información sobre la reclamación a la FAO para que cambie su engañosa definición de bosque, ver también <http://wrm.org.uy/es/todas-las-campanas/dia-internacional-de-los-bosques-2107/>



Indonesia – Protestas en Java contra la destrucción de los bosques por la expansiva industria cementera. En Indonesia, la resistencia contra el complejo de producción de cemento de la compañía indonesia Semen Indonesia, que destruirá el bosque Kendeng karst en las tierras montañosas de Java, ha ido en aumento. El 21 de marzo, Patmi, una mujer proveniente de una de las aldeas del distrito de Tambakromo, murió a causa de un posible ataque cardíaco luego de estar días sentada en un plantón en protesta frente al Palacio Presidencial en Yakarta, la

capital. En pocos días, más y más activistas en Yakarta y otras grandes ciudades del país cubrieron sus pies con cemento y realizaron plantones similares, en solidaridad con Padmi y el pueblo de Kendeng. Los activistas están pidiendo a la comunidad internacional solidaridad y apoyo a esta lucha, particularmente frente a la posible decisión presidencial de iniciar las actividades a inicios de abril. Este proyecto ocurre en un contexto de acaparamiento masivo de tierra y agua sin precedentes para el consumo de energía y materiales en la región, estableciendo “corredores” para el desarrollo de infraestructura que se adentran más y más en los bosques remanentes de la región. Para más información, vea el artículo corto y obituario en inglés, escrito por Hendro Sangkoyo en memoria de Patmi.

<http://wrm.org.uy/other-relevant-information/the-poetic-and-haunting-death-of-patmi-of-mt-kendeng-java-indonesia/>

RECOMENDADOS



Informe: ¿Qué pasa con nuestros bosques? Del 21 al 25 de noviembre de 2016, alrededor de 50 personas comprometidas en la lucha por la defensa de los territorios, los bosques y los medios de subsistencia de las comunidades que dependen del bosque, se reunieron en Tailandia para una visita de campo al noreste del país, seguida de una reunión de 3 días en Bangkok. Además de una delegación de Tailandia concurren otros participantes de Myanmar, Camboya, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Malasia e India. Entre los objetivos de la reunión, que se centró en el tema “¿Qué pasa con

nuestros bosques?”, figuraron la promoción del intercambio y el diálogo sobre los antiguos y nuevos desafíos y amenazas que enfrentan las comunidades de los diferentes países. A pesar de la diversidad de idiomas y culturas de los participantes, se encontraron varios valores y preocupaciones en común, como por ejemplo la importancia del bosque para su subsistencia, así como las amenazas y los desafíos que enfrentan a la hora de defender sus territorios y bosques frente al acaparamiento de



tierras y la deforestación. El informe y los vínculos a las presentaciones de la reunión están disponibles (en inglés) en:

<http://focusweb.org/content/what-happening-our-forests-conference-report-and-presentations>



Video sobre las amenazas de la minería de oro en el río Tanintharyi, en Myanmar. “El agua es vida. Si no protegemos el río Tanintharyi, la vida y el sustento de los aldeanos locales que dependen del río serán destruidos”, dice un aldeano local de la cuenca del río Tanintharyi en la introducción a la película. “Debemos impedir la destrucción del río por el bien de las generaciones futuras. Nos reunimos aquí para mostrar nuestro desacuerdo con la extracción de oro en el río Tanintharyi”, explica.

El video documenta un encuentro de oración budista-cristiana organizado por la población local de la cuenca del río Tanintharyi para mostrar su oposición a las actividades mecanizadas de la minería de oro, iniciadas recientemente por la compañía Shwe Tun Pauk en el río Tanintharyi. Más de 200 aldeanos - que representan a 60 aldeas - viajaron en barco para unirse al encuentro, llegando desde lugares de hasta 160 km río abajo. El grupo también inspeccionó las actividades mineras y pidió ver documentación que demuestre que la compañía Shwe Tun Pauk tenía permiso legal para realizar sus actividades allí. Los aldeanos no recibieron respuestas satisfactorias de los trabajadores del lugar, y exigieron una reunión pública con el jefe de la compañía Shwe Tun Pauk. El 8 de enero de 2016 se celebró una reunión pública con el jefe de la compañía Shwe Tun Pauk. El video que documenta la reunión está disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=mPolcAAXtqo>

<https://www.youtube.com/watch?v=3sQ6IFITN9c>

La película *Save Our River, Save Our Life* está disponible en inglés en:

https://www.youtube.com/watch?v=pxDA_P73ZDM

La versión birmana está disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=YR2mD__jTU4



Cultivando desastres: las principales compañías del mundo van por la cosecha

Un informe de la ONG GRAIN relata como las empresas de agronegocios más grandes del mundo implementan programas de asociación público-privada para aumentar su control de los alimentos y la agricultura en el Sur Global. El programa se llama *Grow* y forma parte de la “Nueva Visión para la Agricultura”, una iniciativa del Foro Económico Mundial (FEM) lanzada en 2009 y dirigida por 31 de las empresas “asociadas” al FEM y que son parte de la industria alimentaria. El 90% de estas empresas tienen su sede en Estados Unidos y Europa, y ninguna de ellas es de China, Brasil, Japón, Corea, Tailandia o Sudáfrica. Sin embargo, la “Nueva Visión para la Agricultura” y su programa *Grow* se centran totalmente en América Latina, África y Asia, los principales mercados en crecimiento de la industria alimentaria mundial. El énfasis principal de la iniciativa “Nueva Visión para la Agricultura” es la agricultura por contrato, que vincula a los



pequeños agricultores con empresas multinacionales (y menos, por ejemplo, con plantaciones industriales). El informe en inglés está disponible en (las versiones en español y francés estarán disponibles pronto):

<https://www.grain.org/article/entries/5623-cultivando-desastres-las-principales-companias-del-mundo-van-por-la-cosecha>



Entrevista: “El aceite de palma sostenible obtenido de la producción industrial de palma aceitera no existe”.

SwissInfo conversa con Kartini Samon, de GRAIN, sobre los impactos de la producción industrial de palma aceitera en las comunidades y sobre el papel de los bancos suizos en el acaparamiento de tierras cuando financian la expansión de las plantaciones de palma aceitera en Indonesia. La entrevista (en francés) está disponible en:

http://www.swissinfo.ch/fre/accaparement-des-terres_-il-n-existe-pas-de-production-d-huile-de-palme-industrielle-Durable-/43009936



Vietnam: “¿Por qué y cómo hacer una agricultura ecológica?”

Taller de Capacitación en la Escuela ecoagraria HEPA en Vietnam. El informe describe cómo los sistemas de cultivo arraigados en las culturas, las leyes consuetudinarias y la experiencia local de la agricultura campesina reunida a lo largo de numerosas generaciones, difieren de la agricultura agroindustrial denunciada en varios de los artículos de este boletín como acaparamiento de tierras y una amenaza para los bosques y los pueblos de los bosques de la región del Mekong (y

más allá). El informe (en inglés) está disponible en:

<http://cendiglobal.org/upload/medias/why-and-how-ecological-farming.pdf>



Informe: Cediendo soberanía: Cómo los acuerdos de inversión amenazan la regulación de la minería en Filipinas.

En la última década, Filipinas ha apostado fuertemente a la minería industrial. Tiene 47 minas a gran escala activas y hay creciente evidencia de sus costos sociales y ambientales. El informe argumenta que la capacidad del país para regular adecuadamente o cerrar las minas contaminantes quedará seriamente restringida por una red de tratados de inversión que Filipinas ha firmado, que ofrece una protección excesiva a los

inversionistas extranjeros. Esta camisa de fuerza legal se apretará aún más si el gobierno continúa con el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Filipinas, y con la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por su sigla en inglés). El informe (en inglés) está disponible en: <http://focusweb.org/content/signing-away-sovereignty-how-investment-agreements-threaten-regulation-mining-industry>



El boletín del WRM busca apoyar y contribuir con las luchas de los pueblos en la defensa de sus territorios y bosques.

Puede suscribirse gratuitamente aquí:

<http://wrm.us9.list-manage1.com/subscribe?u=f91b651f7fecdf835b57dc11d&id=9615b4bc94>

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)

Este boletín está disponible también en inglés, francés y portugués

Editor en jefe: Winfridus Overbeek

Redactora responsable: Joanna Cabello

Apoyo editorial: Elizabeth Díaz, Jutta Kill, Flavio Pazos, Teresa Pérez

Secretariado internacional del WRM

Avenida General María Paz 1615 oficina 3. CP 11400, Montevideo, Uruguay

Teléfono y fax: 598 26056943

wrm@wrm.org.uy - <http://wrm.org.uy>